

**EN LO PRINCIPAL:** Recurso de Reposición. **EN EL OTROSÍ:** Acompaña documentos.

## **SEÑORA SUPERINTENDENTA DEL MEDIO AMBIENTE**

**Juan Carlos Lillo Blanco**, cédula de identidad [REDACTED] en representación de **Puerto Caldera S.A.** (en adelante indistintamente “Puerto Caldera”), Rol Único Tributario N° 96.617.550-8, y de **Servicios Portuarios del Pacífico Limitada** (en adelante indistintamente “Serviport”), Rol Único Tributario N° 76.337.201-3, todos domiciliados para estos efectos en calle Gómez Carreño N° 49, oficina 401, comuna y provincia de Valparaíso, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, en el proceso sancionatorio Rol N° **D-118-2021**, a la señora Superintendente del Medio Ambiente respetuosamente digo:

Que, en la representación que invisto y encontrándome dentro de plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 20.417 Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, vengo en interponer recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° 2087, de fecha 1 de octubre de 2025, de esa Superintendencia (en adelante, indistintamente como la “Resolución Recurrida” o “Res. Ex N° 2087/2025”), notificada a esta parte por correo electrónico con fecha 2 de octubre de 2025, que resuelve el procedimiento administrativo y aplica sanciones de multa en contra de las empresas Puerto Caldera y Serviport, solicitando sea admitido a trámite y, en definitiva, sea acogido, disponiéndose la enmienda de la Resolución Recurrida en los términos en que se solicita para reducir las sanciones pecuniarias aplicadas, conforme a los argumentos de hecho y derecho que paso a exponer.

### **I. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO.**

Puerto Caldera, titular del muelle Punta Caleta ha desarrollado en el tiempo la actividad de embarque de productos agrícolas y afines, principalmente durante la temporada veraniega, cada año entre los meses de noviembre o diciembre y marzo o abril. Durante los años 2020 y 2021, a través del mismo muelle se hicieron embarques es de mineral de hierro, usando al efecto como cancha de acopio del mineral previo a su embarque parte de la superficie de un predio fiscal obtenido en arrendamiento a la empresa Serviport, actividad que cesó en el mes de agosto de 2021, época a partir de la cual, el muelle Punta Caleta volvió a su actividad de embarque de productos agrícolas y afines durante la temporada de verano antes definida.

En el contexto de la ejecución de los Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Resoluciones de Calificación Ambiental y a la recepción de denuncias formuladas por particulares respecto a las actividades relacionadas con el acopio de minerales antes aludidas, esa Superintendencia realizó las inspecciones ambientales que dieron lugar al expediente de fiscalización y al Informe de Fiscalización Ambiental DFZ-2020-3538-III-RCA.

De acuerdo con el Informe de Fiscalización, y considerando que el Proyecto “Cancha acopio de minerales” no había sido sometido a evaluación ambiental previa, con fecha 2 de febrero de 2021, esa Superintendencia dictó la Resolución Exenta N°241, que ordenó a Serviport la ejecución de medidas provisionales pre procedimentales en relación con la operación de la cancha de acopio. Más tarde y con la finalidad de evaluar el cumplimiento de estas medidas, con fecha 9 de marzo de 2021, ordenó una nueva fiscalización la que concluyó, a su vez, con la elaboración del Informe de Fiscalización DFZ2021-570-III-MP.

Finalmente, por Resolución Exenta SMA N° 1/Rol D-118-2021, de 11 de mayo de 2021, esa Superintendencia formuló cargos en contra de ambas empresas por las siguientes infracciones:

- a) Fraccionamiento del proyecto el cual contempla, a lo menos, actividades de acopio y embarque de concentrado de cobre; acopio, transporte y embarque de hierro, por parte de Puerto Caldera S.A. y Serviport, sociedades relacionadas, con generación de emisiones atmosféricas.
- b) Incumplimiento de la medida provisional pre procedimental decretada por la SMA en la Resolución Exenta N° 241, de 2 de febrero de 2021.

Conforme a lo prescrito en el artículo 42 de la Ley N° 20.417 ambas empresas presentaron un Programa de Cumplimiento ("PdC"), finalmente aprobado por Resolución Exenta SMA N° 12/Rol D-118-2021, de fecha 8 de julio de 2022, contemplando un plazo de 30 meses para la ejecución de las acciones comprometidas, fijándose su vencimiento para el 1 de enero de 2025. Al amparo del PdC, las empresas ejecutaron las acciones comprometidas para volver al cumplimiento normativo durante 24 de los 30 meses de su plazo de vigencia.



Encontrándose en ejecución el PdC, el Primer Tribunal Ambiental, acogiendo el recurso de reclamación deducido por terceros interesados, en sentencia de fecha 7 de junio de 2024, resolvió dejar sin efecto la resolución de la SMA que lo aprobó por adolecer, según lo razonado por el Tribunal, de un vicio de legalidad, al presentar deficiencias metodológicas y carecer de la entidad suficiente para dar por acreditado el cumplimiento de los criterios de integridad y eficacia.

Conforme a lo anterior, la Superintendencia, por Resolución Exenta N° 13, de fecha 12 de julio de 2024, dispuso el reinicio del procedimiento sancionatorio en contra de ambas empresas, ordenando la presentación de una nueva versión refundida del PdC, lo que las Empresas no estuvieron en disposición de cumplir atendido el hecho de haber decidido no prosperar en la actividad de embarque de mineral de hierro, según se ha señalado. De este modo y ante la decisión de las empresas de no presentar un nuevo texto refundido, por Resolución Exenta N° 14, de 28 de agosto de 2024, de esa Superintendencia dispuso el rechazo el PdC y el señalado reinicio del proceso sancionatorio, disponiendo un plazo para que las empresas presentaran sus descargos respecto de las infracciones descritas, lo que efectivamente hicieron con fecha 17 de septiembre de 2024.

Mediante Resolución Exenta N° 16, de 2 de julio de 2025, en forma previa a resolver el proceso sancionatorio, la Superintendencia solicitó a las empresas el aporte de mayores antecedentes con la finalidad de ponderar fundadamente las circunstancias del artículo 40 de la Ley N° 20.417, requerimiento que cumplieron con la presentación de fecha 29 de julio de 2025, acompañando los antecedentes solicitados.

Finalmente, por Resolución Exenta N° 2087/2025, en relación con los cargos imputados, la Superintendente del Medio Ambiente resolvió lo siguiente:

- (i) En relación al cargo N° 1, consistente en: “Fraccionamiento del proyecto indicado en el acápite II del presente acto, el cual contempla, a lo menos, actividades de acopio y embarque de concentrado de cobre; acopio, transporte y embarque de hierro, por parte de Puerto Caldera S.A. y Serviport, sociedades relacionadas, con generación de emisiones atmosféricas.” aplíquese la sanción consistente en una multa equivalente a dos mil setecientas setenta y cinco unidades tributarias anuales (2775 UTA) a Puerto Caldera S.A y una multa equivalente a ciento cinco unidades tributarias anuales (105 UTA) a Servicios Portuarios del Pacífico Limitada.

- (ii) En relación al cargo N° 2, consistente en: “Incumplimiento de la medida provisional pre procedimental decretada por la SMA en la Resolución Exenta N° 241, de 2 de febrero de 2021, en los términos indicados en la tabla N° 3 de la formulación de cargos”; aplíquese la sanción consistente en una multa equivalente a treinta y uno unidades tributarias anuales (31 UTA) a Puerto Caldera S.A. y una multa equivalente a dieciséis unidades tributarias anuales (16 UTA) a Servicios Portuarios del Pacífico Limitada.

## **II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.**

### **1. Falta de motivación de la Resolución Exenta N° 2087, de 1 de octubre de 2025.**

#### **1.1. Generalidades.**

La resolución que impone sanciones de multa a Puerto Caldera y Serviport, que por este acto se impugna, carece de motivación suficiente ya que no fundamenta las razones en cuanto a la ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley N° 20.417 y la manera en que se determinaron las sanciones por cada cargo infraccional, no pudiendo advertirse la forma en que el ente sancionador, recurriendo a tales circunstancias, fija las multas aplicadas.

A este respecto la Superintendencia, señala que para la ponderación de la circunstancias reguladas por el artículo 40 de la Ley N° 20.417, necesaria para la fundamentación de la aplicación de las sanciones a ser impuestas, utilizó las Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales (en adelante “Bases Metodológicas”), documento que además de precisar la forma de aplicación de cada una de estas circunstancias establece que, para la determinación de las sanciones pecuniarias, se realizará una adición entre un primer componente, que representa el beneficio económico derivado de la infracción, y una segunda variable, denominado componente de afectación, que representa el nivel de lesividad asociado a cada infracción. Agrega que este último se obtiene en base al valor de seriedad asociado a cada infracción, el que considera la importancia o seriedad de la afectación que el incumplimiento ha generado, por una parte, y la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental, por la otra. El componente de afectación, en



fin, se ajustará de acuerdo a determinados factores de incremento y disminución, considerando también el factor relativo al tamaño económico de la empresa.

Teniendo a la vista el propio razonamiento de la Superintendencia, la aplicación de las sanciones debe ser motivada precisamente en los criterios del artículo 40 de la Ley N° 20.417, de manera que pueda entenderse cómo fundamenta el monto específico de la multa aplicada atendiendo a los señalados criterios. Sobre esta materia y entendiéndose que el ente sancionador posee cierta discrecionalidad para arribar a su decisión de aplicación de sanción, esta debe atenerse a parámetros objetivos que la fundamenten.

Así lo ha entendido la doctrina cuando señala el profesor Bermúdez (Fundamentos de Derecho Ambiental, 2° Edición, Valparaíso: Ediciones Universitarias, 2014, p.480.) que, una vez determinada la infracción, deberán considerarse ciertos criterios de graduación y ponderación de sanciones, que en general se derivan del principio de proporcionalidad, que es fundamental del Derecho administrativo sancionador. Conforme a él se permite adecuar la represión a la infracción y sus circunstancias, limitando la discrecionalidad administrativa en su imposición.

La resolución recurrida señala que para la determinación de la multa ha considerado entre otras circunstancias del artículo 40 de la Ley N° 20.417 las siguientes: la importancia del daño causado o del peligro ocasionado; el número de personas cuya salud pudo afectarse por la infracción; el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; la conducta anterior de los infractores; la capacidad económica de estos y las medidas correctivas empleadas.

No obstante lo anterior, el razonamiento de la SMA para justificar los abultados y desproporcionados montos de las multas aplicadas a ambas empresas por cada uno de los cargos imputados carece de la suficiente motivación por cuanto no puede inferirse de qué manera los criterios tenidos en consideración por la autoridad determinaron la cuantía de las multas impuestas, dificultando a las empresas encauzar su defensa acudiendo a criterios objetivos y razonados, conforme se analiza más adelante.

En efecto, en la resolución no se indicó qué porcentajes o puntajes se asignaron a cada uno de los elementos que forman parte de la fórmula que se utiliza para calcular

el valor de la multa. La tabla que contiene los criterios para la determinación de la multa incluye recargo del 100% para el cargo 1 a pesar de que no se ponderaron factores de incremento. Además, sitúa el valor de seriedad entre 500 y 1.000 UTA, sin indicar la cantidad exacta de UTA que se consideró en el monto de la multa aplicada. Ello hace que sea imposible verificar la forma en que la SMA determinó finalmente el monto de las multas, lo que ha dejado a las empresas en la imposibilidad de conocer el procedimiento a través del cual la autoridad concluyó en los valores aplicados.

## **1.2. Sobre la determinación del beneficio económico.**

Un primer aspecto en el que queda de manifiesto la falta de fundamentación de la resolución impugnada se refiere a la forma en que la Superintendencia calcula el beneficio económico obtenido por las empresas a partir de las ganancias ilícitas determinadas luego de la revisión de la información aportada por estas y que consta en el expediente sancionatorio.

La misma Superintendencia señala que el beneficio económico obtenido por el infractor puede definirse como la combinación del beneficio asociado a costos retrasados o evitados y el beneficio asociado a ganancias ilícitas, anticipadas o adicionales. Agrega en el considerando 210° de la resolución recurrida es necesario definir el beneficio económico respecto de cargo configurado *“... identificando las variables que definen cada escenario, es decir, los costos o ingresos involucrados, así como las fechas o periodos en que estos son incurridos u obtenidos-, para luego valorizar su magnitud a través del modelo de estimación utilizado por esta Superintendencia, el cual se encuentra descrito en las Bases Metodológicas”*.

Ahora bien, conforme se infiere de la tabla contenida en la resolución recurrida y que se incluye a continuación, luego de la revisión de los antecedentes económicos aportados, la SMA estimó, respecto del cargo 1, una ganancia ilícita de Puerto Caldera equivalente a 2.184 UTA y, en el caso de Serviport, de 774 UTA, mientras que para el cargo 2, consideró como costo retrasado para ambas empresas el equivalente a 271 UTA.



**Tabla 16. Resumen de la estimación del beneficio económico**

Cargo	Empresa	Ganancia que origina el beneficio	Costo retrasado o evitado (UTA)	Periodo/fechas	Beneficio Económico (UTA)
1	Puerto Caldera	2.184 UTA	-	Junio 2020 – Septiembre 2021	2.650 UTA
	SERVIPOINT	774 UTA	-	Septiembre 2020 – Diciembre 2021	46 UTA
2	Puerto Caldera	-	271	Febrero 2021 – abril 2021	3
	SERVIPOINT	-	271	Febrero 2021 – abril 2021	3

Fuente: Elaboración propia.

Luego, la misma resolución en su considerando 224° concluyó respecto del cargo 1 que “... a partir de la aplicación del modelo de estimación utilizado por esta Superintendencia ... el beneficio económico estimado asociado a esta infracción asciende a 2.650 UTA en el caso de Puerto Caldera y de 46 UTA en el caso de Serviport”, y en lo relativo al cargo 2, “... de 6 UTA”. Agrega sobre esto último que “... Dado que no es posible estimar los costos incurridos por cada una de las empresas, se prorrateará el beneficio económico en 3 UTA en el caso de Puerto Caldera y 3 UTA en el caso de Serviport.” (considerando 233°).

De la sola lectura de los considerandos y tabla antes mencionados no es posible inferir el método de estimación aplicado para llegar a los montos fijados como beneficio económico. En efecto, y en lo referente al cargo 1 para Puerto Caldera, en el considerando 221° la SMA concluye que “... la suma de los márgenes de ganancia de Puerto Caldera en el periodo asciende a M\$ 1.815.599, equivalentes a 2.184 UTA...”, para luego indicar en el considerando 224° que “se concluye el beneficio económico estimado asociado a esta infracción asciende a 2.650 UTA en el caso de Puerto Caldera...” , generándose una diferencia de 466 UTA por sobre las ganancias ilícitas supuestamente obtenidas por la empresa. Esta falta de justificación y exposición de la forma en como arribó a la determinación del beneficio económico, que tiene directa incidencia en la sanción aplicada, en este caso de 2.775 UTA, deja en evidencia la falta de motivación de la decisión adoptada por la SMA, lo que debe ser subsanado al resolver este recurso.

Del mismo modo, señala la resolución recurrida en el considerando 211° que “para efectos de la estimación del beneficio económico, se consideró ... una tasa de descuento de un 11,1%, estimada en base a parámetros económicos de referencia generales, información financiera de la empresa y parámetros específicos del rubro portuario...”. Agrega al efecto la misma resolución en la nota al pie de página N° 48, que se incorpora el efecto tributario a través del impuesto de primera categoría del



período correspondiente, sin que pueda advertirse cómo ha sido ponderado dentro de la modelación realizada por la SMA para determinar la tasa de descuento.

Finalmente, tampoco queda suficiente clara la contraposición efectuada entre el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de las medidas provisionales y los costos retrasados respaldados en el marco de los medios de verificación presentados en el PdC refundido de fecha 8 de febrero de 2022, dejando en evidencia que no hay claridad en la metodología empleada para la determinación de dicho beneficio.

### **1.3. Sobre el componente de afectación.**

Conforme ha sido señalado, el componente de afectación, que representa el nivel de lesividad asociado a cada infracción, se obtiene en base al valor de seriedad asociado a cada infracción, atendiendo a la importancia o seriedad de la afectación que el incumplimiento ha generado y a la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental, el que finalmente se ajustará de acuerdo a determinados factores de incremento y disminución, considerando también el factor relativo al tamaño económico de la empresa.

#### **1.3.1. Sobre la determinación del valor de seriedad.**

Conforme lo dispuesto en la resolución recurrida, la SMA afirma respecto de ambos cargos que, a partir de los antecedentes expuestos “*se puede indicar que no se constató un peligro o riesgo al medio ambiente o a la salud de las personas...*” y que “*... no se configura una afectación ni riesgo a la salud de las personas.*”, razón por la cual, agrega, que tales circunstancias no serán ponderadas para efectos de determinar el valor de seriedad de la infracción (letras a) y b) del artículo 40 de la Ley N° 20.417).

En cambio, la autoridad si aplicó para la determinación del valor de seriedad en la fijación de la multa el criterio de la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental consagrado en la letra i) del mismo artículo 40, como una circunstancia que permite valorar la relevancia que un determinado incumplimiento ha significado para el sistema regulatorio ambiental, más allá de los efectos que la infracción ha podido generar. La valoración de esta circunstancia permite que la sanción cumpla adecuadamente su fin preventivo, y que se adecúe al principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción.



Sobre esta materia las Bases Metodológicas establecen que el valor de seriedad se determina conforme a la asignación de un puntaje de seriedad de 0 a 100, sobre la base de tres categorías, cuya aplicación puede tener como consecuencia una multa que puede ir de 0 a 10.000 UTA, dependiendo de la clasificación de la infracción como leve, grave o gravísima en los términos del artículo 36 de la Ley N°20.417. Agregan estas Bases que para establecer el puntaje específico que corresponda aplicar a la infracción dentro del rango señalado, deben ponderarse cada una de las circunstancias que concurren en la fijación del valor de seriedad, a saber, (i) la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental y (ii) la importancia de los efectos y/o el riesgo causado en la salud de las personas y en el medio ambiente.

Como puede advertirse, más allá del análisis sobre las circunstancias tenidas en consideración para concluir de la forme en que lo hizo, la resolución recurrida omite señalar en qué medida las razones otorgadas influyeron en el cálculo del valor de seriedad y por ende en las sanciones impuestas, al no haber consignado el puntaje asignado conforme a las Bases Metodológicas.

Este hecho obliga a las empresas sancionadas a tener que suponer que esta asignación corresponde al rango que se establece para la categoría 3 para el cargo 1 y categoría 2 para el cargo 2, lo que abiertamente contraviene el derecho del administrado de conocer el fundamento de las decisiones de la autoridad, en este caso, cuando estas afectan directamente el patrimonio del supuesto infractor. Al efecto, solo se puede deducir de la tabla de determinación de las sanciones que el valor de seriedad, como ha sido señalado que, para el cargo 1, corresponde a un rango entre 500 y 1000 UTA, mientras que para el cargo 2, el valor de seriedad se sitúa entre 1 y 200 UTA, sin que se haya señalado el valor específico expresado en UTA, por lo que corresponde que la señora Superintendente rectifique la resolución recurrida incorporando el puntaje que sirve de fundamento para finalmente determinar las multas.

La circunstancia descrita configura una falta de motivación del acto recurrido en los términos resueltos por el Segundo Tribunal Ambiental y confirmados por la sentencia recaída en la causa Rol N° 79.353-2020 de la Corte Suprema al señalar que *“la exposición de la Resolución reclamada deja en evidencia los problemas de motivación que la afectan, toda vez que se establece que se hace uso de la facultad entregada por el artículo 40 de la Ley N° 20.417, limitándose a señalar que las circunstancias descritas en la referida disposición ... si serán consideradas o*



*descartadas, sin precisar cómo éstas influyen en el cálculo del componente de afectación, lo que también ocurre en el caso de factores de disminución, impidiendo el ejercicio del derecho a defensa y el control jurisdiccional de proporcionalidad de la multa impuesta. Es decir, no se señala, en concreto, cuáles son todas las razones que determinan el ejercicio de la potestad, incorporando incertidumbre respecto de los motivos que llevaron a determinar la cuantía de la multa reclamada, y cómo incidió en su determinación cada uno de los factores de incremento o disminución, en términos precisos y concretos, cuestión que no se condice con las exigencia previstas para un acto de tal naturaleza, pues la fundamentación del acto administrativo es un elemento de su esencia...”*

### **1.3.2. Sobre la calificación de la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental.**

Conforme a las Bases Metodológicas para determinar la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental debe considerarse los siguientes elementos: tipo de norma infringida, rol dentro de la regulación ambiental, objetivo ambiental y características propias del incumplimiento. Sin embargo, en la resolución se omiten dichos elementos, y se optó por una referencia genérica al reproche que las infracciones merecen.

Así, para el cargo 1, la SMA estimó una vulneración al sistema jurídico de protección ambiental de importancia alta, indicando que la misma “...merece un reproche mayor, puesto que se trata de una elusión al sistema bajo la modalidad del fraccionamiento...” (considerando 290°). Agrega, sin embargo, que “De todas formas, para el caso particular, conforme se ha establecido en la presente resolución, la actividad no ha generado riesgo ni afectación al medio ambiente ni a la salud de las personas. Asimismo, las labores de acopio, transporte y embarque del mineral hierro cesaron en agosto del 2021” (considerando 294°).

Respecto al cargo 2, estimó una vulneración al sistema jurídico de protección ambiental de importancia media, indicando que “El cumplimiento íntegro y oportuno de las medidas provisionales ordenadas por la SMA es relevante para la protección del medio ambiente y la salud de las personas, ya que estas medidas permiten a la autoridad actuar de forma inmediata y directa frente a riesgos inminentes. En este contexto, el incumplimiento de tales medidas configura una vulneración relevante al sistema jurídico de protección ambiental” (considerando 296°). Luego tiene presente



que “... las medidas decretadas fueron ejecutadas dentro de un corto plazo después de terminada la vigencia de las medidas provisionales, entre marzo y abril de 2021” (considerando 302°) y que, “... para el caso particular, conforme se ha establecido en la presente resolución, la actividad no ha generado riesgo ni afectación al medio ambiente ni a la salud de las personas. Asimismo, las labores de acopio, transporte y embarque del mineral hierro cesaron en septiembre del 2021” (considerando 303°).

En relación con las características propias de la infracción del cargo 2 se consideró que el incumplimiento de las medidas pre procedimentales fue total a pesar de que las sociedades infractores se vieron afectadas por decisiones y circunstancias ajenas a su voluntad, tal es el caso de las medidas pre procedimentales N° 2 y 3, para cuyo cumplimiento se debía contar con materiales traídos del extranjero (malla raschel), ya que la escasez de materiales de construcción provocada por la pandemia de Covid-19, que fue un hecho público y notorio, lo impidieron.

En cuanto a la calificación de la importancia establecida en la resolución impugnada, debe tenerse presente que respecto del cargo 1, debió considerarse de importancia no superior a media, teniendo para ello en cuenta que la finalidad perseguida por el criterio de la vulneración del sistema jurídico es que la sanción cumpla adecuadamente su fin preventivo y que se adecúe al principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción.

En el caso de autos ocurre que si bien las empresas no discuten la existencia de la infracción, la forma en que ha obrado durante todo el procedimiento administrativo y así lo reconoce la propia autoridad, tuvo un carácter limitado en el tiempo y cesó incluso con anterioridad a la aprobación del Programa de Cumplimiento más tarde anulado judicialmente, además de haber adoptado otras medidas reconocidas como atenuantes en la resolución recurrida que justifican que la calificación de este criterio no pudo ser la más alta. Lo anterior también se ve reflejado en la circunstancia de no haberse generado riesgo ni afectación al medio ambiente ni a la salud de las personas como se consigna en el considerando 294°, lo que debe explicarse precisamente en el hecho del cese de las labores de acopio, transporte y embarque del mineral hierro desde agosto del año 2021.

En cuanto a la calificación de importancia media del cargo 2, tampoco se evidencia su justificación por cuanto si bien las medidas que originaron la infracción

fueron incumplidas, como lo reconoce la propia autoridad en el considerando 302°, sí fueron implementadas dentro de un corto plazo entre marzo y abril de 2021 y, posteriormente, ampliadas con ocasión de las acciones incorporadas en el Programa de Cumplimiento ejecutadas durante 24 de los 30 meses proyectados para su implementación en razón de la anulación dispuesta por el Primer Tribunal Ambiental. Lo anterior, más aún si, como lo señala la propia SMA, no se ha generado riesgo ni afectación al medio ambiente ni a la salud de las personas, lo que también se explica por el hecho del cese de las labores de acopio, transporte y embarque del mineral hierro desde agosto del año 2021.

Teniendo en vista lo anterior, corresponde solicitar a la señora Superintendente se rectifique la calificación efectuada en la resolución recurrida a la “importancia a la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental”, calificando el cargo 1, al menos, como de “importancia media” y en el caso del cargo 2, al menos, como de “importancia baja”, asignándole el correspondiente puntaje justificatorio. De este modo, la sanción podrá adecuadamente su fin preventivo adecuándose al principio de proporcionalidad al modificarse la categoría de importancia y con ello el valor de seriedad asignado a cada uno de los cargos, más aún cuando la propia resolución recurrida estimó que no se configura una afectación ni riesgo a la salud de las personas ni tampoco se constató un peligro o riesgo al medio ambiente, además que como se ha dicho, las actividades que dieron origen a los hechos infraccionales cesaron en el año 2021 no obstante haberse aprobado un PdC que fue propuesto para volver al cumplimiento normativo.

#### **1.4. Sobre la determinación de las circunstancias de incremento y disminución.**

Resulta necesario extender el reproche sobre la fundamentación que ha hecho la resolución recurrida sobre las sanciones de multa en cuanto a la aplicación de los factores de incremento y disminución de las mismas.

En efecto, la resolución consideró únicamente como factor de incremento de la sanción la intencionalidad en la comisión de la infracción conforme a la letra d) del artículo 40 de la Ley N° 20.417 para el cargo 2 señalando que “... respecto de los incumplimientos de las medidas provisionales pre procedimentales durante su periodo



*de vigencia ... las empresas tenían pleno conocimiento de lo ordenado por este Servicio y de sus plazos de ejecución.” (considerando 312°).*

En lo relativo a los factores de disminución, la resolución consideró la procedencia de la irreprochable conducta anterior, de la cooperación eficaz en el procedimiento y/o investigación y la aplicación de medidas correctivas (esta última solo para el cargo 2), de acuerdo con lo dispuesto en las letras e) e i) del artículo 40 de la Ley.

Al igual que para el caso de la determinación del valor de seriedad, la resolución no consigna en la tabla que determina las sanciones la forma en que se arriba al valor asignado a cada una de las circunstancias consideradas para la determinación final de la sanción, ni la forma en como ellas influyen en el cálculo del componente de afectación incurriendo, por lo tanto, en una falta de motivación del acto recurrido, que impide a las empresas sancionadas encauzar su defensa en criterios objetivos y razonados.

En este sentido ha resuelto el Segundo Tribunal Ambiental en la causa Rol N° 196-2018 al señalar que *“... la SMA debe fundamentar la ponderación de las circunstancias del artículo 40 ... que le permiten arribar a la sanción específica aplicada al caso concreto, explicitando la medida y el efecto que tiene la aplicación de cada uno de los criterios o factores que le permiten arribar a una sanción en específico. Este deber de fundamentación no implica la determinación ex ante o la existencia de un sistema de tarificación en materia ambiental, ya que sólo comprende señalar en qué medida se ha aplicado un criterio, cuánto puntaje se la ha asignado, lo cual no limita la discrecionalidad en su determinación conforme a las bases metodológicas, y los motivos para ésta, de manera que resulte posible reproducir el razonamiento que llevó a la SMA a determinar la sanción. Como se explicó, esta fundamentación permite garantizar la proporcionalidad de la sanción, así como una adecuada defensa al sancionado y la posterior revisión judicial del acto sancionatorio”.*

Conforme a lo razonado se solicita a la señora Superintendente que rectifique la resolución impugnada ponderando adecuadamente las circunstancias atenuantes y la forma en que ellas influyen en la fijación del valor de las sanciones aplicadas, limitando con ello la discrecionalidad en la decisión y justificándose que la sanción impuesta,

según corresponda, sea proporcional a la infracción en los términos señalado en la jurisprudencia citada.

**2. Sobre la Capacidad Económica.**

La resolución que por ese acto se impugna dispone que la capacidad económica atiende a la proporcionalidad del monto de una multa con relación a la capacidad económica concreta del infractor, considerando al efecto el tamaño económico y la capacidad de pago.

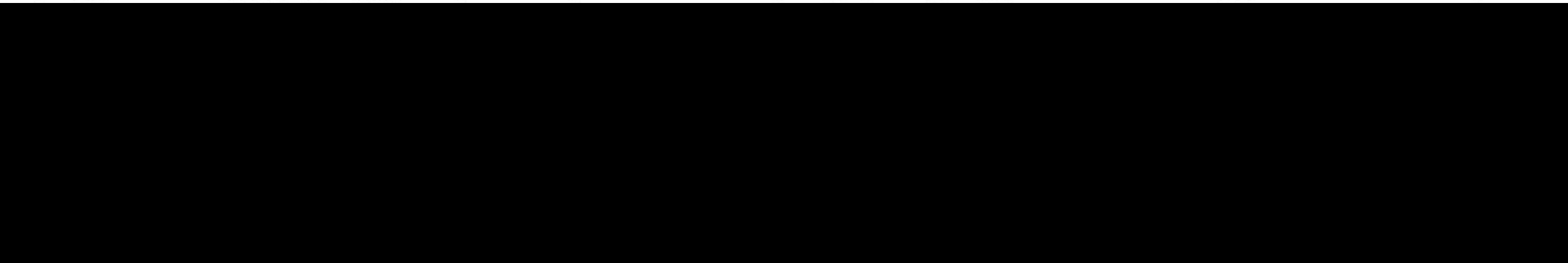
A este respecto la resolución señala que mientras el tamaño económico se asocia al nivel de ingresos anuales, actuales o potenciales, la capacidad de pago tiene relación con la situación financiera específica del infractor en el momento de la aplicación de las sanciones, en razón de no poder ser esta conocida antes de su determinación, por lo que debe ser el infractor quien debe acreditar su situación financiera para hacer frente a estas.

**2.1. Sobre el tamaño de las sociedades infractoras.**

Conforme a la resolución que por este acto se impugna, el tamaño económico se asocia al nivel de ingresos anuales, actuales o potenciales del infractor, y normalmente es conocido por la Superintendencia de forma previa a la aplicación de sanciones.

Sobre el particular la autoridad determinó que el tamaño económico de las empresas habiendo tenido a la vista la información proporcionada por ellas entre los años 2019 al presente, clasificó a Puerto Caldera como Mediana 1 considerando que los ingresos anuales en el año 2024 ascendieron a M\$ 1.856.731, equivalente a 48.331 UF; y a Serviport como Pequeña 3, por ingresos el 2021 por M\$ 703.046 equivalente a 22.685 UF y aplicó un ajuste para la disminución del componente de afectación.

En el caso de Serviport, la autoridad consideró los ingresos correspondientes al año 2021, en circunstancias que, conforme a los antecedentes acompañados en el proceso (Estado Financiero 2024), la sociedad no tiene ingresos y en cambio arroja





## **2.2. Sobre la capacidad de pago.**

En cuanto a la capacidad de pago, la resolución señala que ella tiene relación con la situación financiera específica del infractor en el momento de la aplicación de las sanciones pecuniarias determinadas para el caso bajo análisis de acuerdo a las reglas generales, la cual, normalmente no es conocida por esta Superintendencia de forma previa a la determinación de sanciones. En razón de ello, corresponde al infractor acreditar, de ser el caso, que ese encuentra en situación de dificultad financiera para hacer frente a estas.

Sobre este particular cabe hacer presente a la señora Superintendente que Puerto Caldera ni Serviport poseen capacidad de pago para hacer frente a las abultadas sanciones de multa impuestas por la resolución recurrida.

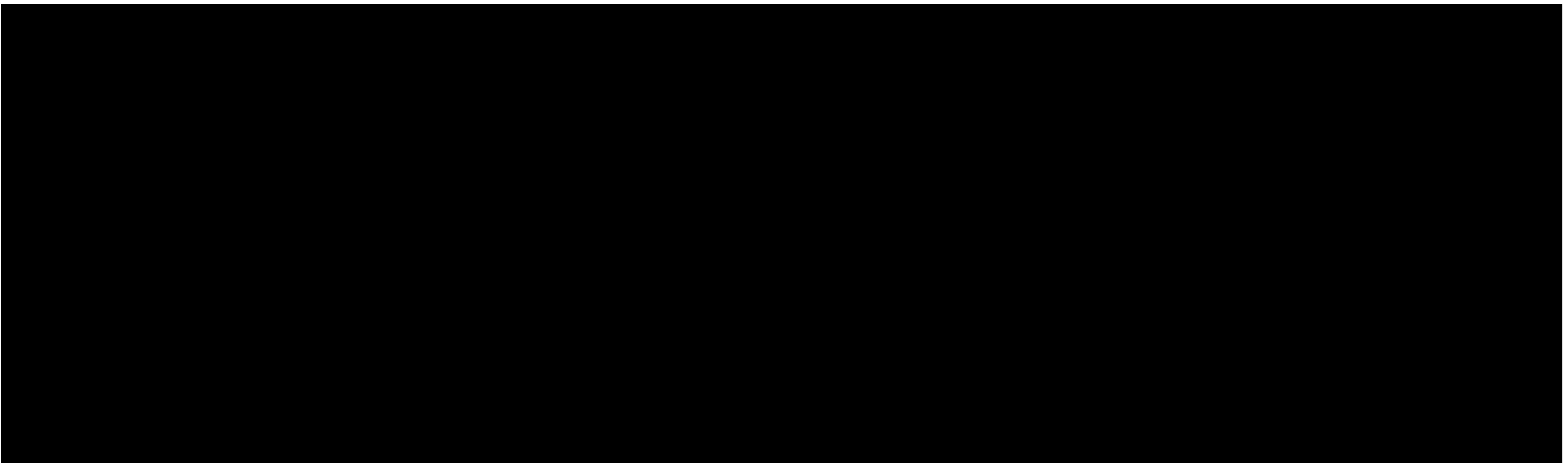
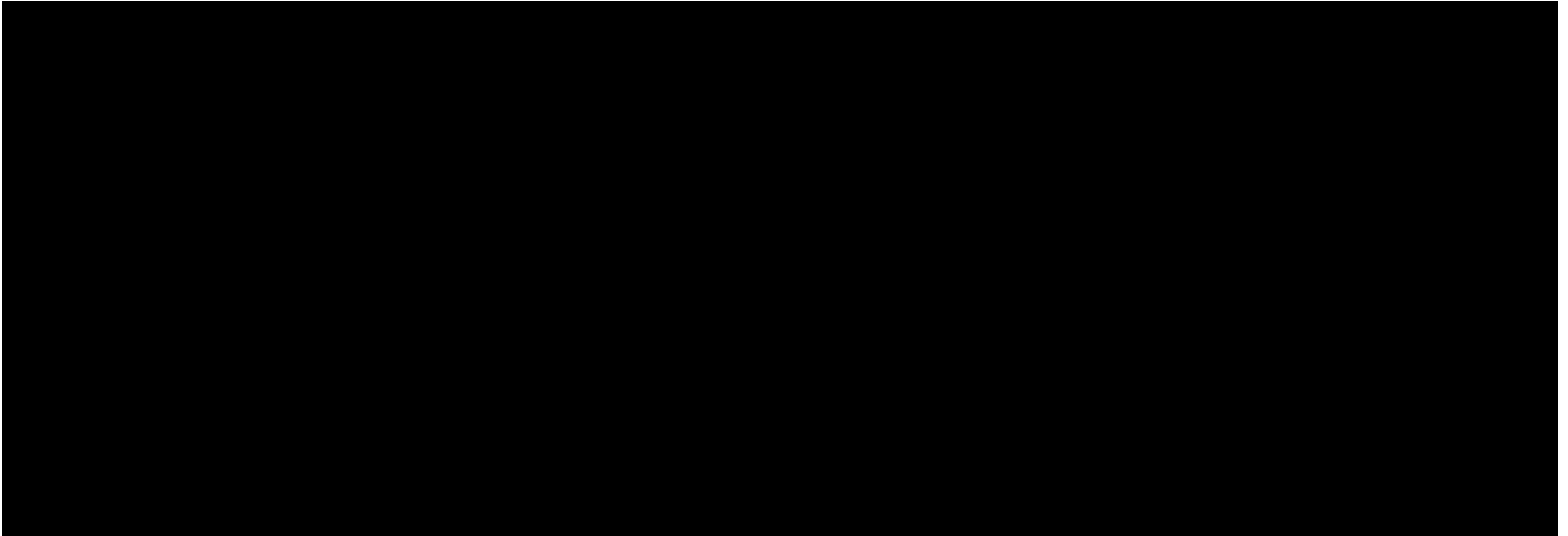
Conforme obra en el expediente, y se reiterará en esta presentación, la historia del muelle Punta Caleta de propiedad de Puerto Caldera da cuenta de su actividad de embarque de productos agrícolas y afines desde el año 1992, reportando siempre una actividad que se extendía anualmente desde el mes de noviembre-diciembre a marzo-abril, generando los ingresos percibidos por ella. Terminados los embarques de hierro que solo tuvieron lugar entre los años 2020 y 2021, cesando en agosto de ese año, el muelle Punta Caleta limitó su actividad exclusivamente a los señalados productos agrícolas y afines para lo cual, incluso, ajustó el objeto de la concesión marítima que lo ampara, demostrando su decisión en tal sentido, lo que también obra en el expediente y fue ponderado en la resolución sancionatoria.

La misma Superintendencia en las Bases Metodológicas ha señalado que la sanción debe ser flexible en el sentido de “... *adecuar la sanción al impacto que tendrá en el infractor de acuerdo a su capacidad económica...*”. Así, el análisis de la capacidad económica del infractor no solo debe orientarse a evitar que la sanción pierda eficacia por ser demasiado reducida, sino también a prevenir que se torne desproporcionada e irrealizable por exceder notoriamente las posibilidades reales de pago de la empresa. De lo contrario, la multa dejaría de cumplir con su finalidad disuasiva y correctiva para transformarse en una carga ilusoria y meramente declarativa.

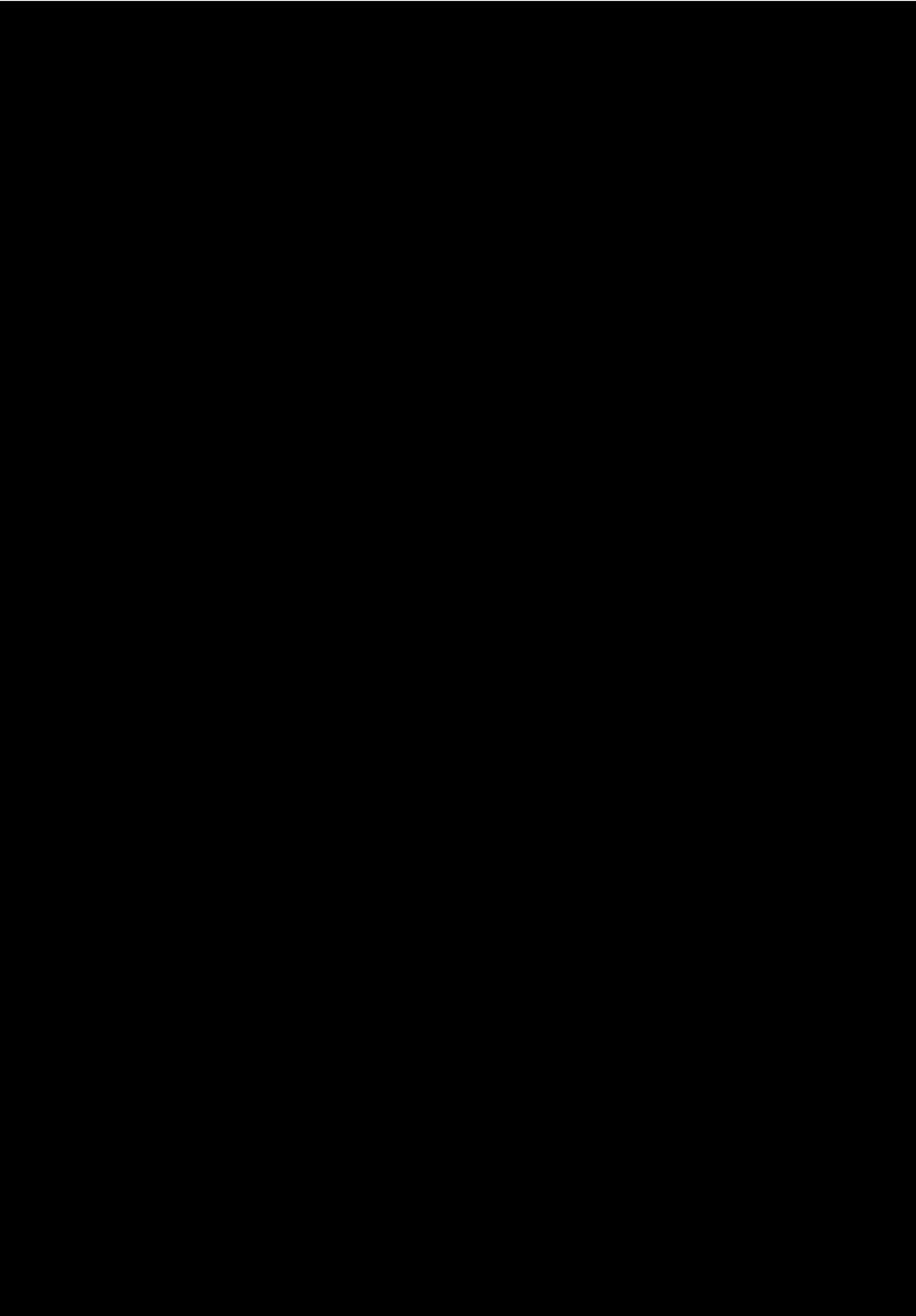
A este efecto, el Segundo Tribunal Ambiental en la sentencia recaída en la causa R-208-2019 señaló que “... *además, a criterio del Tribunal, la exigencia de*

*proporcionalidad de la sanción exige a la SMA recabar todos los antecedentes que considere necesarios para la determinación de la multa, aun cuando el infractor no haya solicitado que se tome en consideración su capacidad de pago. En efecto, el análisis de la SMA debe ser completo, y no puede limitar el análisis de la capacidad económica del infractor sólo al factor de tamaño económico".* El mismo Tribunal, en la sentencia recaída en la causa Rol R-5-2014, a propósito de la capacidad de pago, indicó que "...el objetivo de dicha circunstancia es precisamente el asegurar que haya proporcionalidad entre el monto de la multa y la capacidad de pago real del infractor".


En la misma línea la Corte Suprema, en la sentencia Rol N° 41.815-2016, ha entendido que la sanción deba ser proporcional indicando que tal característica "[...] consiste en que la sanción que se va a aplicar producto de una infracción sea adecuada a la entidad o cuantía que ha tenido la infracción. Si bien la LOSMA establece un catálogo de criterios de ponderación de las sanciones, todos ellos deberán tender, en definitiva, a materializar el principio de proporcionalidad ya que, como se ha señalado, los criterios de graduación y ponderación de las sanciones derivan del principio de proporcionalidad, que se estima como un principio fundamental del derecho administrativo sancionador"











Por consiguiente, en ambos casos, las empresas se ven impedidas de asumir las sanciones aplicadas verse comprometido el principio de proporcionalidad reconocido por la SMA en sus Bases Metodológicas y la jurisprudencia citada, puesto que la cuantía de la multa fijada se torna desproporcionada e irrealizable.

Considerando la situación económica de ambas empresas conforme lo señalado, solicito a la señora Superintendente ajustar las sanciones pecuniarias a la capacidad económica actual de las mismas (tamaño de la empresa y capacidad de pago), con la finalidad de cumplir el criterio de proporcionalidad de la multa sin que resulte imposible su pago generando efectos contraproducentes, como la inviabilidad de la continuidad de la actividad económica o la pérdida de empleos, en lugar de un incentivo al cumplimiento normativo.

**POR TANTO**, de conformidad a lo expuesto y atendido lo dispuesto en el artículo 55 y demás disposiciones citadas de la Ley N°20.417, en la representación que invisto, solicito a la señora Superintendente del Medio Ambiente tener por interpuesto el recurso de reposición administrativa en contra de la Resolución Exenta N° 2087, de 1 de octubre de 2025, notificada a esta parte por correo electrónico con fecha 2 de octubre de 2025, que resuelve el procedimiento administrativo y aplica sanciones de multa en contra de las empresas Puerto Caldera y Serviport , solicitando sea admitido a trámite y, en definitiva, sea acogido, disponiéndose la enmienda de la Resolución Recurrida rectificándola en los términos solicitados y rebajando las sanciones pecuniarias aplicadas.



**OTROSÍ:** Solicito a la señora Superintendente tener por acompañados los siguientes documentos:

1. Certificado de características empresariales de Puerto Caldera S.A. emitido por SII, con fecha 09 de octubre de 2025 (clasificación de empresa).


2. Certificado de características empresariales de Servicios Portuarios del Pacífico Limitada emitido por SII con fecha 09 de octubre de 2025 (clasificación de empresa).

3. Certificado de clasificación de empresa de Puerto Caldera S.A. emitido por Crowe Auditores Consultores Limitada, con fecha 09 de octubre de 2025.

4. Certificado de clasificación de empresa de Servicios Portuarios del Pacífico Limitada emitido por Crowe Auditores Consultores Limitada, con fecha 09 de octubre de 2025.

5. Estados Financieros Puerto Caldera S.A. año 2024.

6. Estados Financieros Servicios Portuarios del Pacífico Limitada año 2024.

Powered by  
 Firma electrónica avanzada  
JUAN CARLOS LILLO  
BLANCO  
2025.10.09 22:43:15 -0300

---

Juan Carlos Lillo Blanco  
pp. Puerto Caldera S.A.  
pp. Servicios Portuarios del Pacífico Limitada

**Nombre o Razón social: PUERTO CALDERA S A****RUT: 96617550-8**

El Servicio de Impuestos Internos certifica que esta información corresponde a la que se encuentra disponible en las bases de datos del SII el día 9/10/2025 a las 14:13 horas.

---

## Características

Descripción	A partir de
MEDIANA EMPRESA	01-01-2025
EMPRESA DE MENOR TAMANO	01-01-2024
REGIMEN GENERAL SEMI INTEGRADO (14A)	01-01-2020
OBLIGADO A FACTURACION ELECTRONICA ETAPA 2: 01 DE AGOSTO 2016	01-08-2016
FACTURADOR ELECTRONICO	17-06-2016





MiSII



Nombre o Razón social: **SERVICIOS PORTUARIOS DEL PACIFICO LIMITADA**

RUT: **76337210-3**

El Servicio de Impuestos Internos certifica que esta información corresponde a la que se encuentra disponible en las bases de datos del SII el día 9/10/2025 a las 14:23 horas.

Características

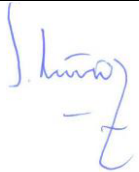
Descripción	A partir de
MICRO EMPRESA	01-01-2025
EMPRESA DE MENOR TAMANO	01-01-2024
REGIMEN GENERAL SEMI INTEGRADO (14A)	01-01-2020
OBLIGADO A FACTURACION ELECTRONICA ETAPA 2: 01 DE AGOSTO 2016	01-08-2016
FACTURADOR ELECTRONICO	17-06-2016

Santiago, 9 de septiembre de 2025

Señor  
Juan Carlos Lillo Blanco  
Gerente General  
Puerto Caldera S.A.  
**PRESENTE**

Muy señor nuestro:

De acuerdo a lo requerido, en nuestra calidad de auditores externos de Puerto Caldera S.A. y por la cual emitimos una opinión con fecha de 2 de mayo de 2025, sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.



Gonzalo Muñoz Manríquez  
Director  
Registro CMF N° 20



Santiago, 9 de septiembre de 2025

**Señor**  
**Juan Carlos Lillo Blanco**  
**Gerente General**  
**Servicios Portuarios del Pacifico Ltda.**  
**PRESENTE**

Muy señor nuestro:

De acuerdo a lo requerido, en nuestra calidad de auditores externos de Servicios Portuarios del Pacifico Ltda. y por la cual emitimos una opinión con fecha de 2 de mayo de 2025, sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.



Saludamos muy cordialmente a usted,

Crowe Auditores Consultores Limitada



Gonzalo Muñoz Manríquez  
Director  
Registro CMF N° 20



## **PUERTO CALDERA S.A.**

Estados Financieros Separados  
al 31 de diciembre de 2024 y 2023

### CONTENIDO

Informe del auditor independiente  
Estados de situación financiera separados  
Estados separados de resultados integrales  
Estados separados de cambios en el patrimonio neto  
Estados separados de flujos de efectivo directo  
Notas explicativas a los estados financieros separados

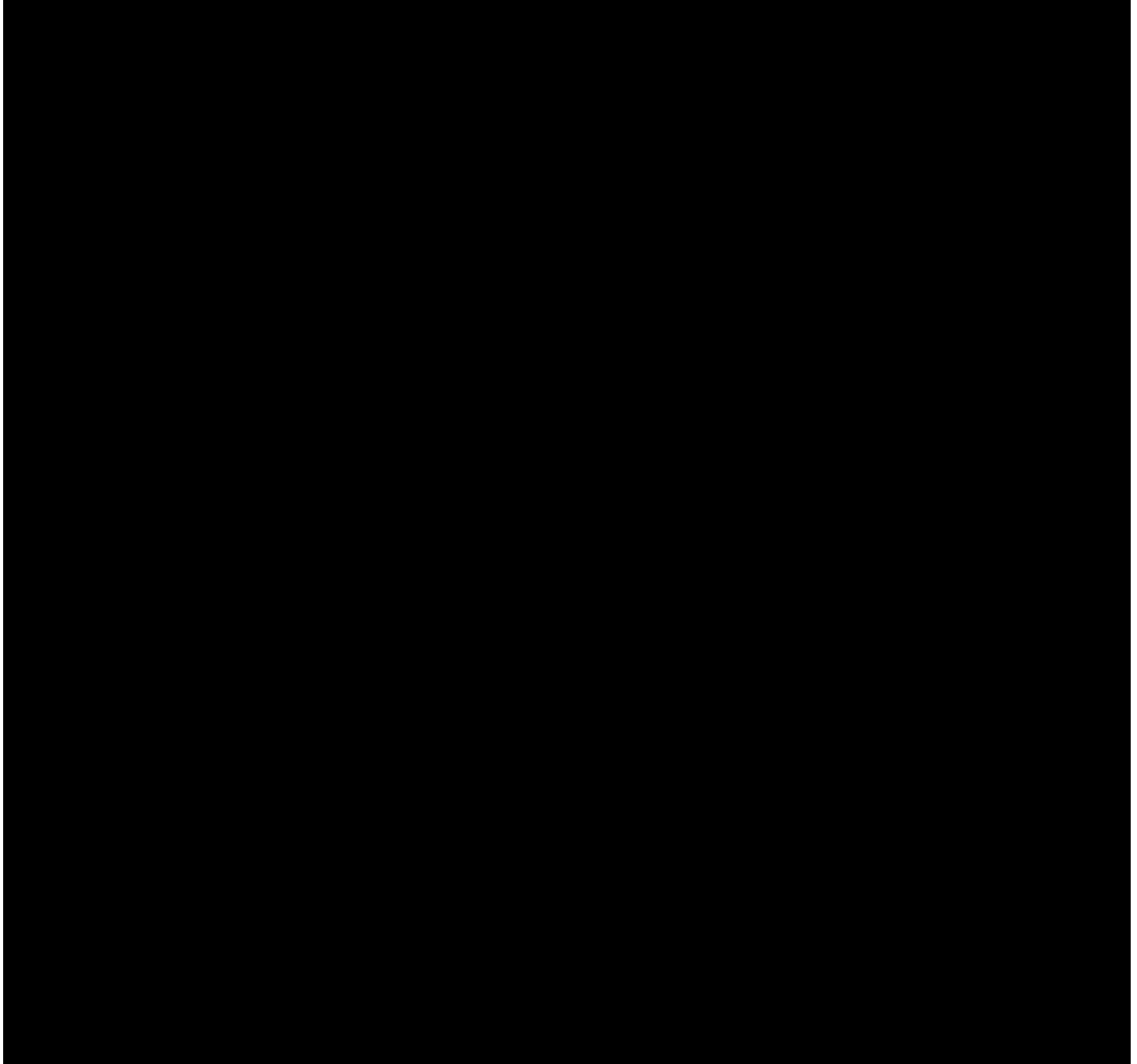
M\$ - Miles de pesos chilenos  
US\$ - Dólares estadounidenses  
UF - Unidad de fomento



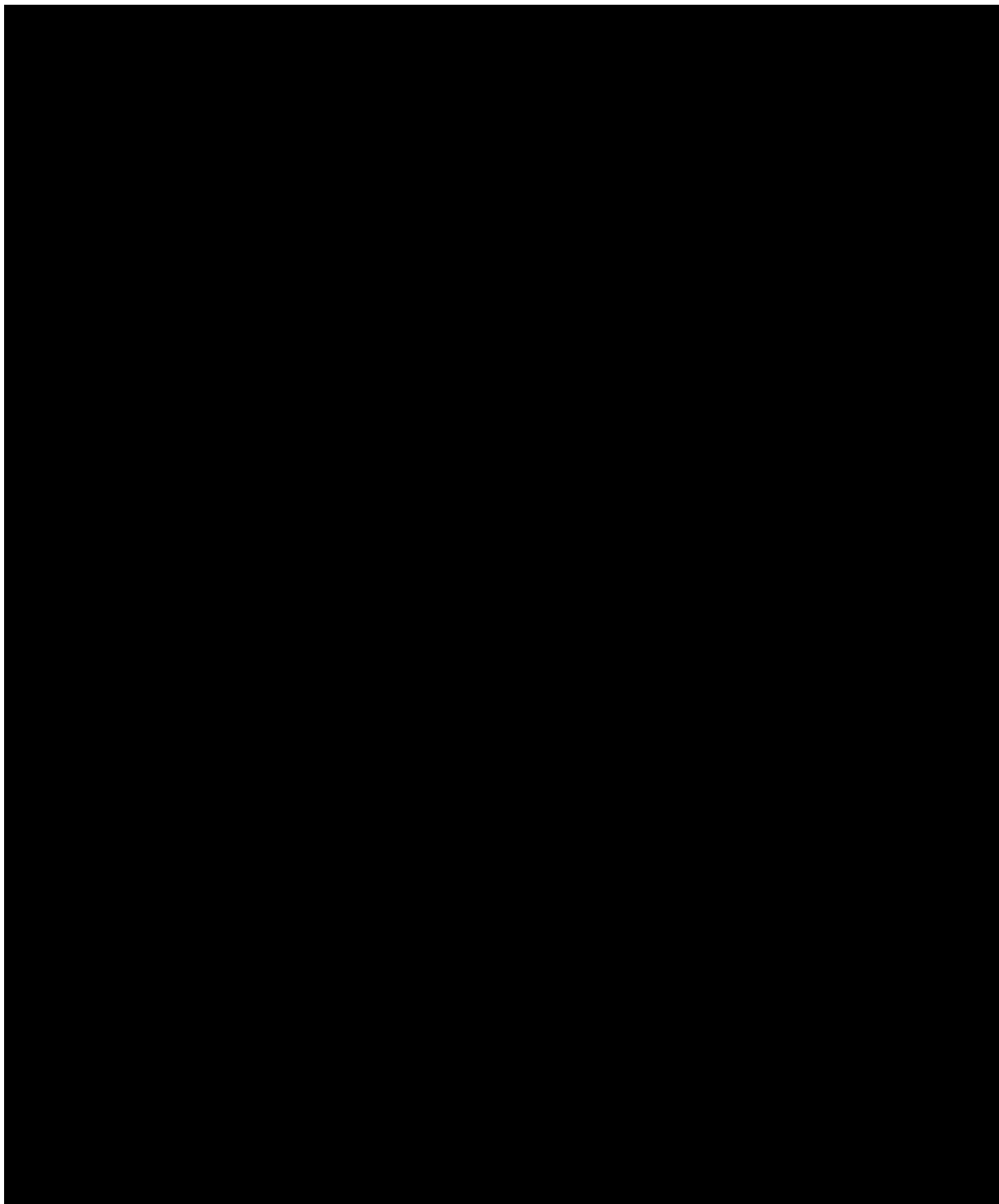


## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Señores Directores y Accionistas  
Puerto Caldera S.A.

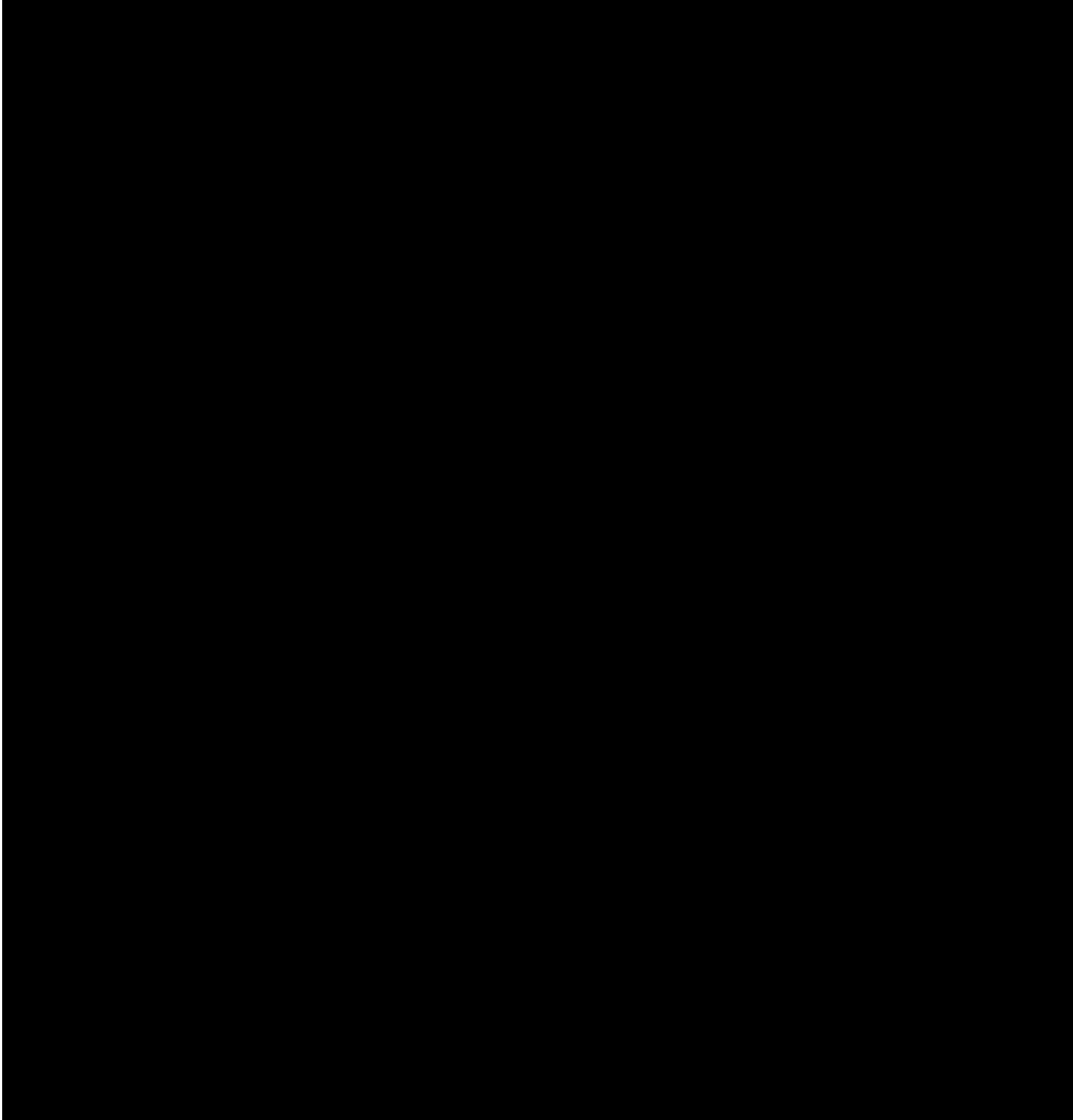


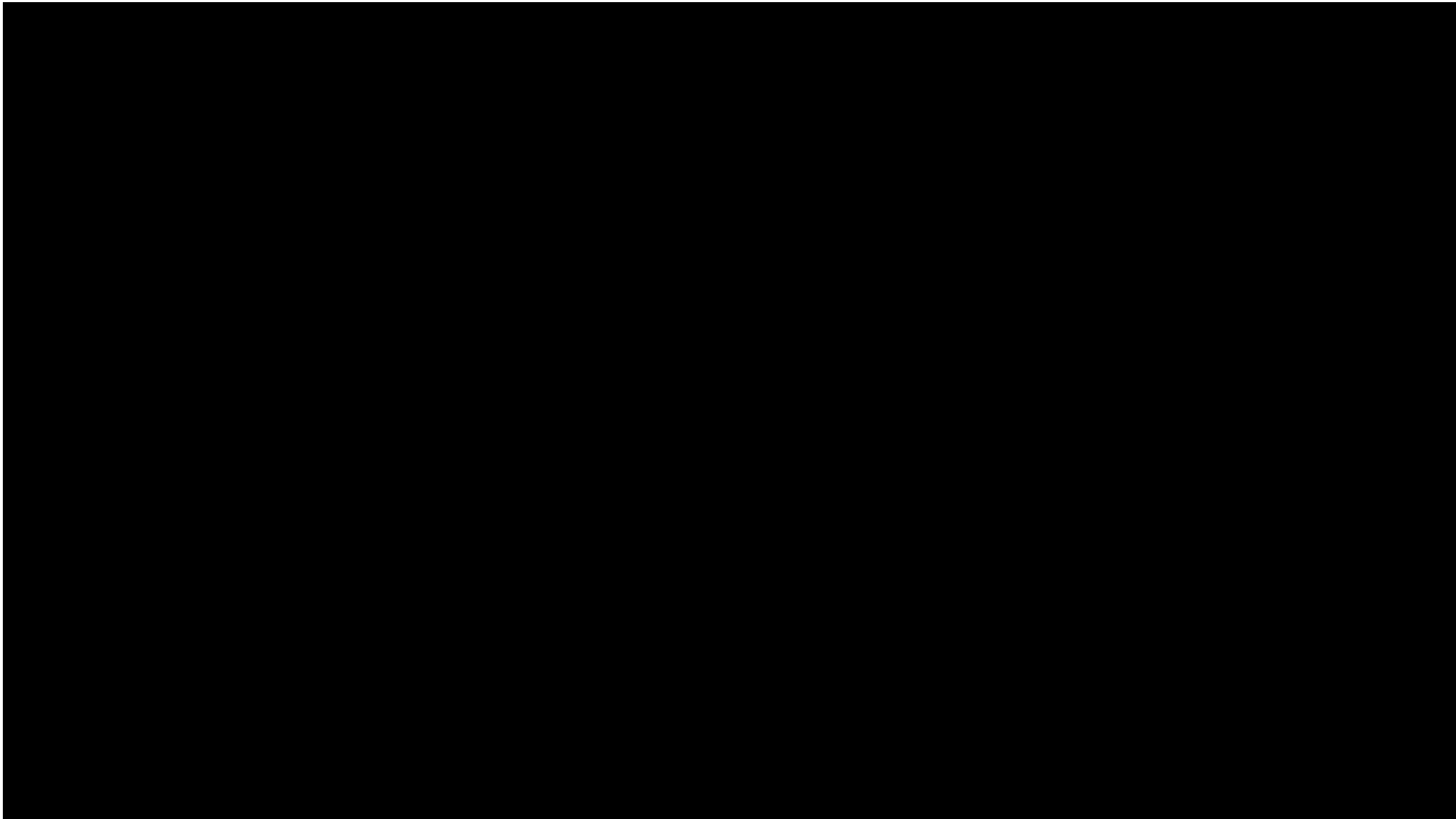




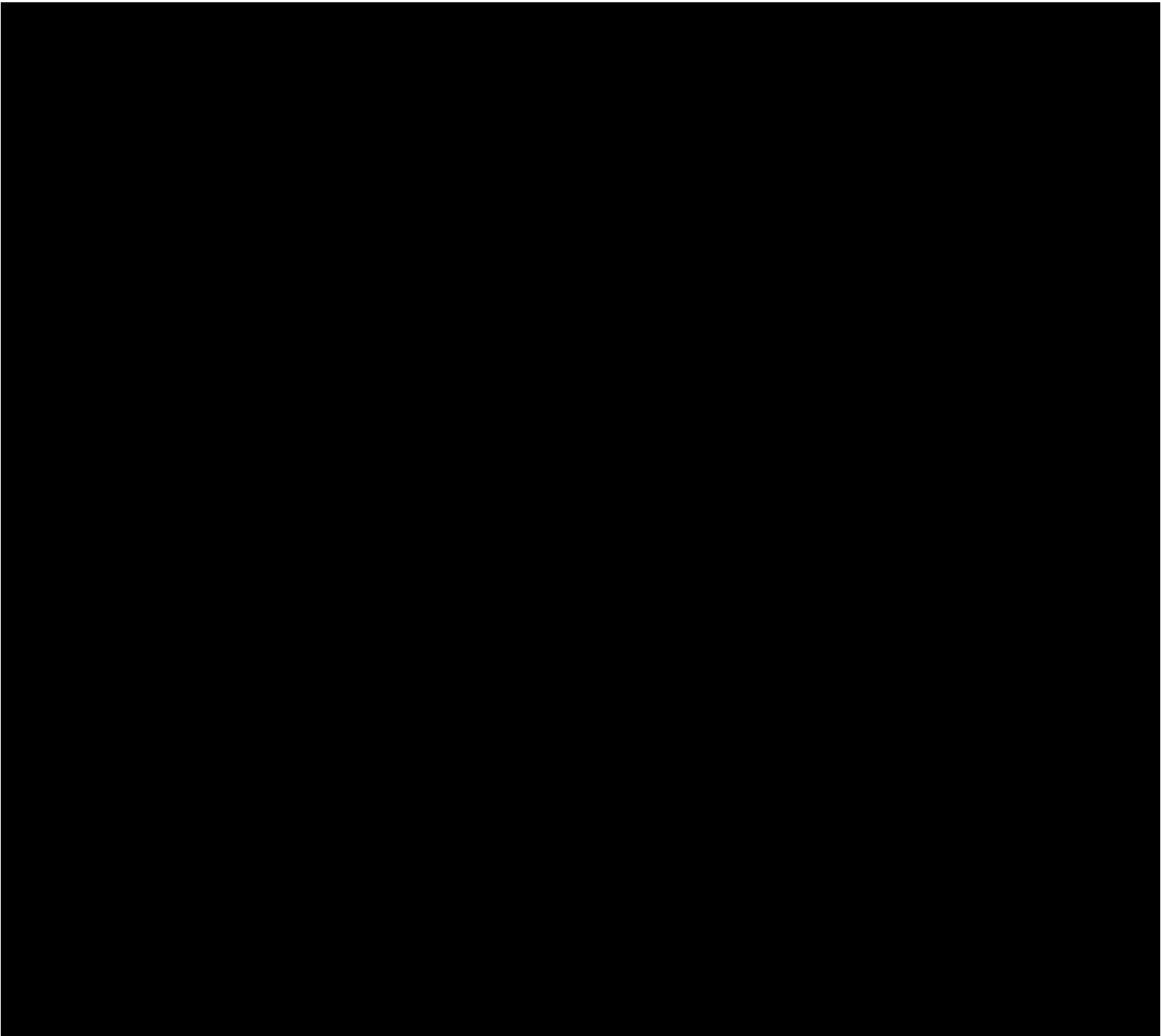
Gonzalo Muñoz Manríquez  
Director  
Santiago, 2 de mayo de 2025.



**PUERTO CALDERA S.A.**

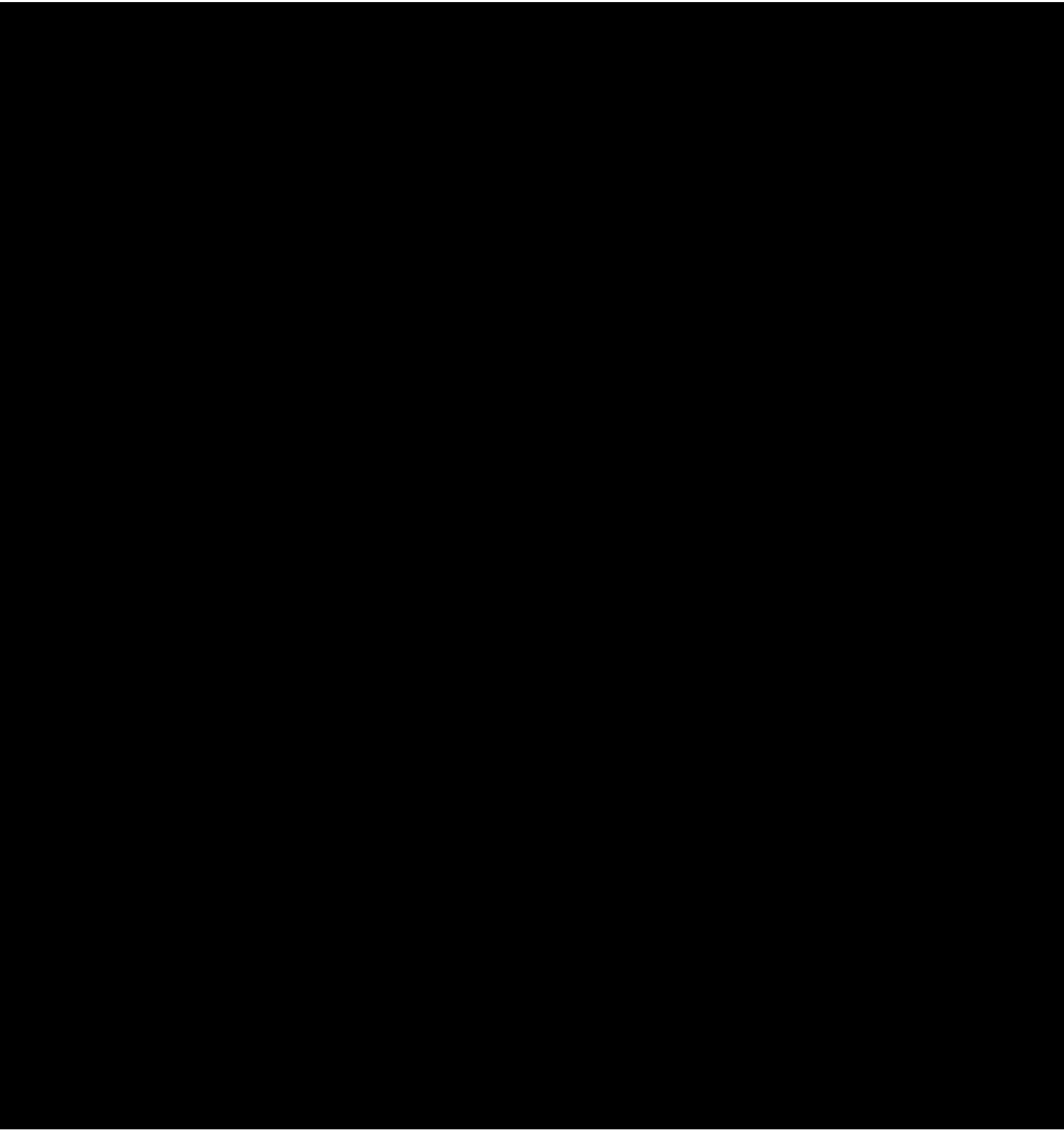


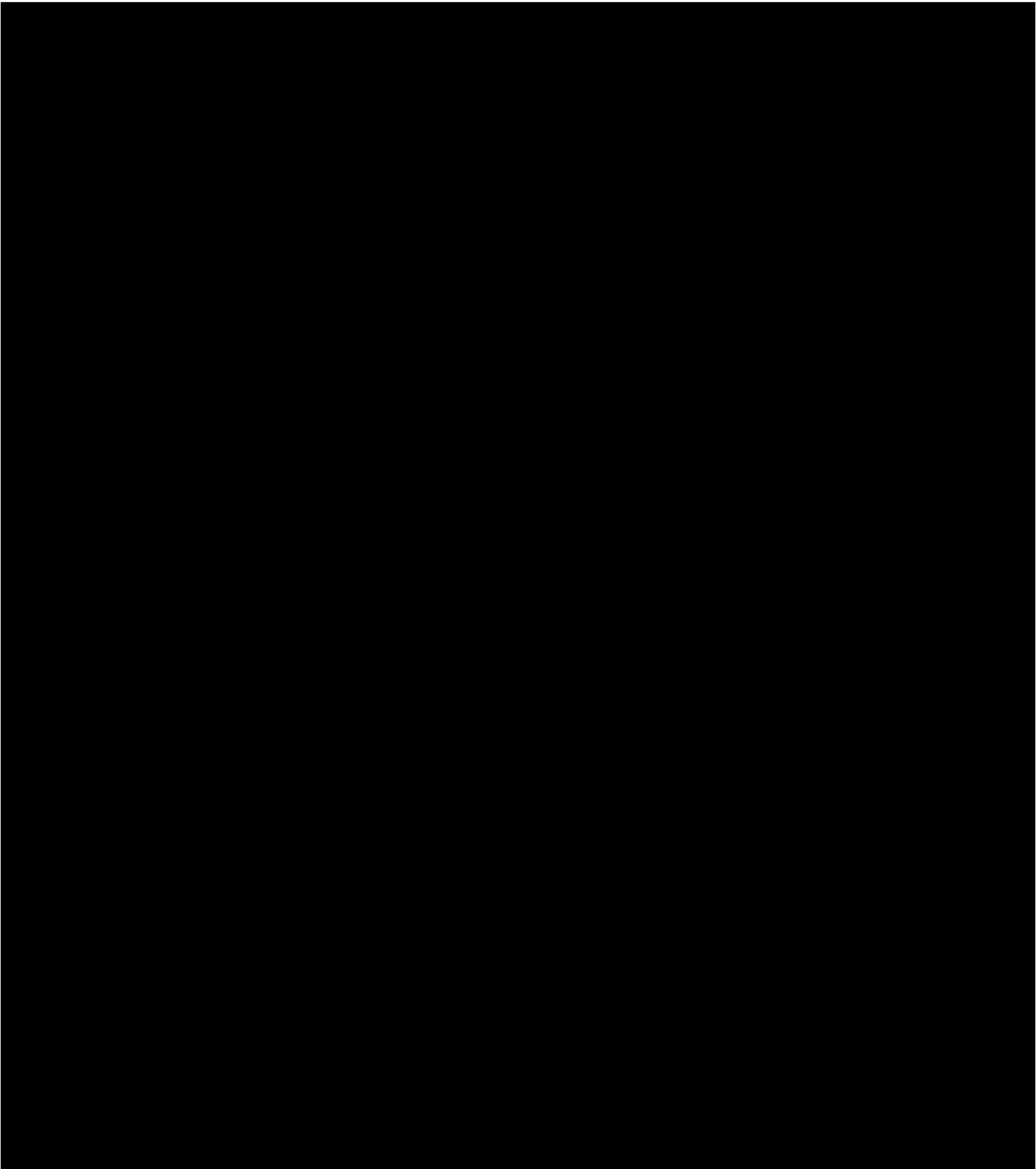


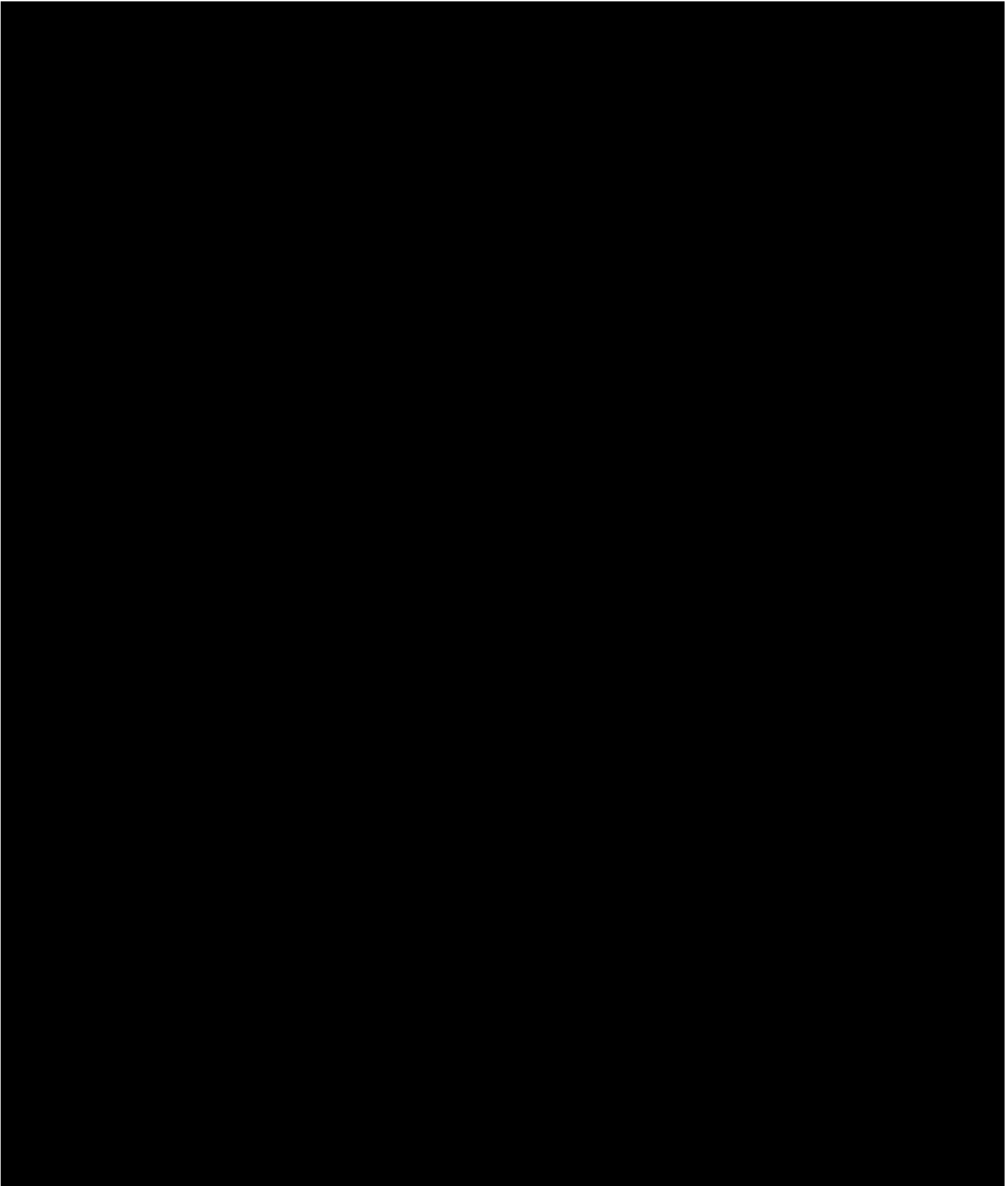


Las Notas adjuntas N° 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros separados.

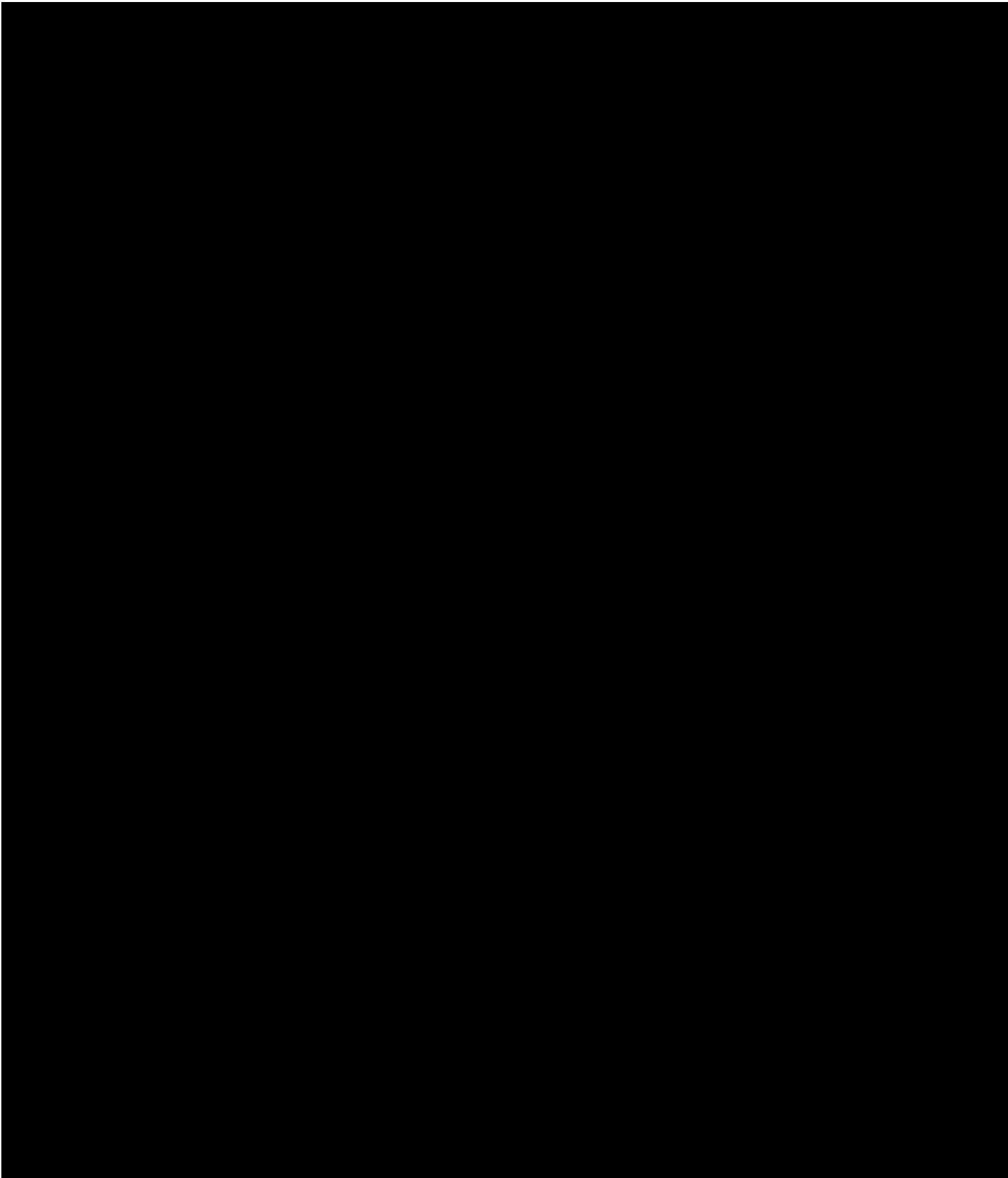


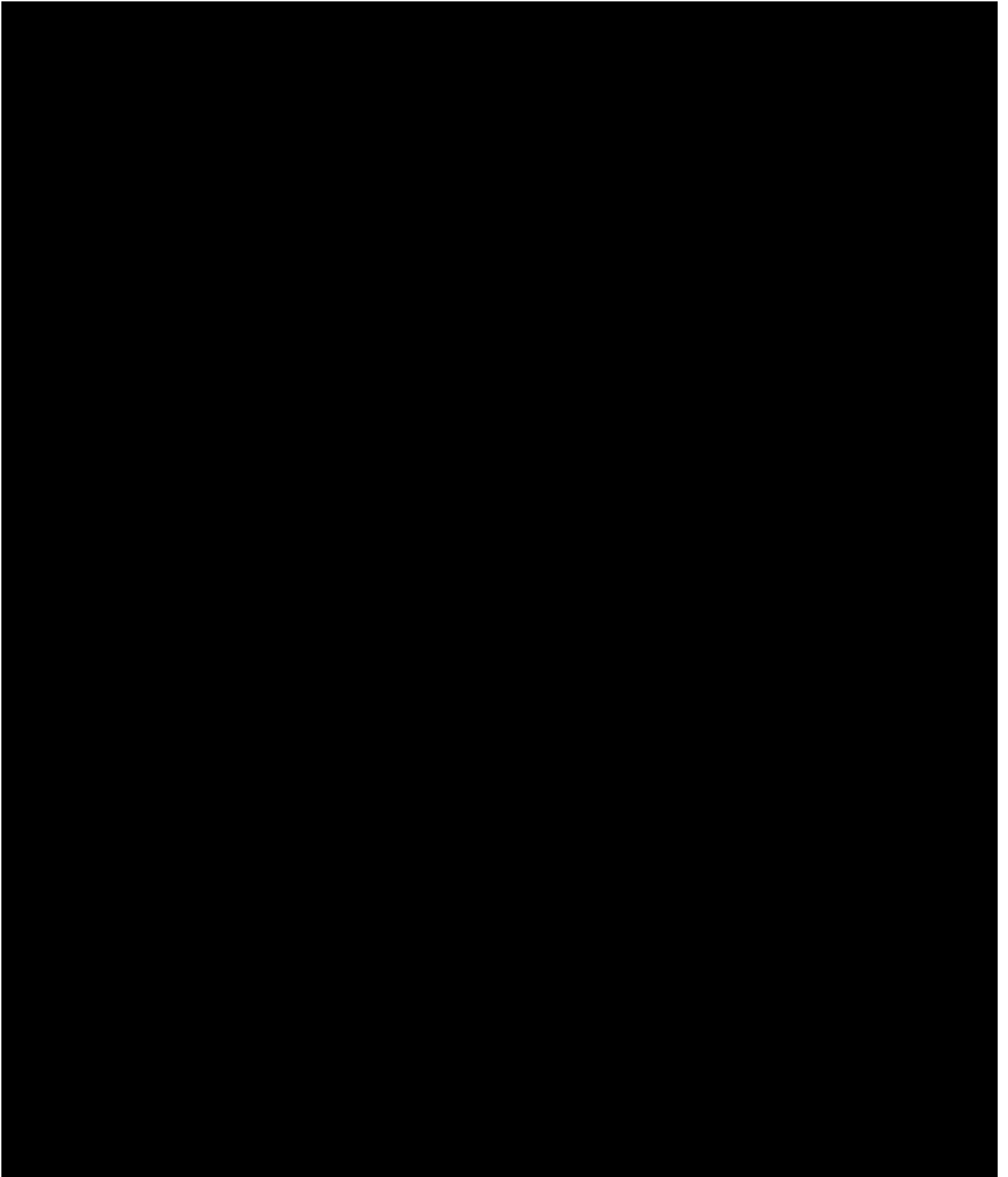


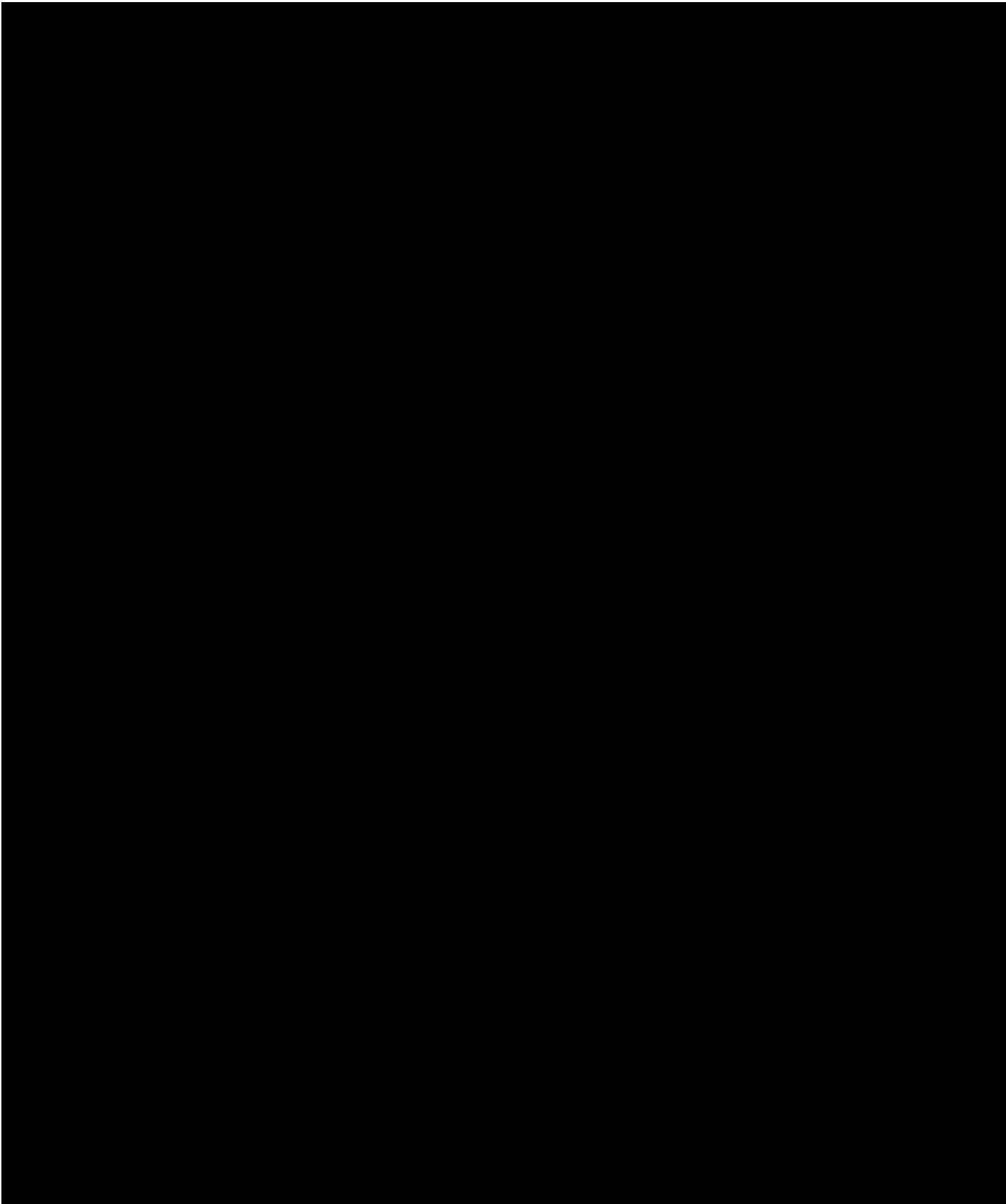




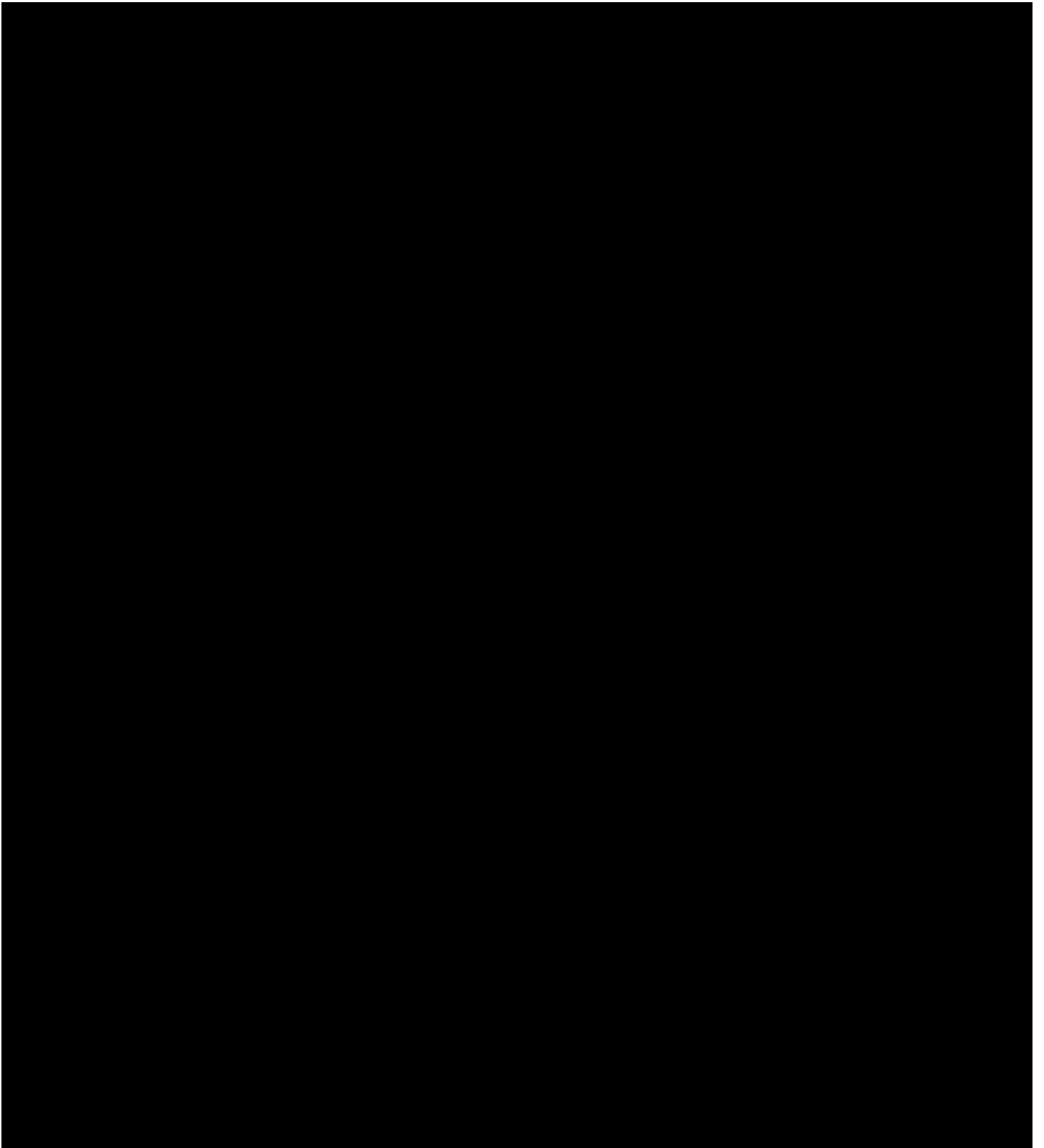


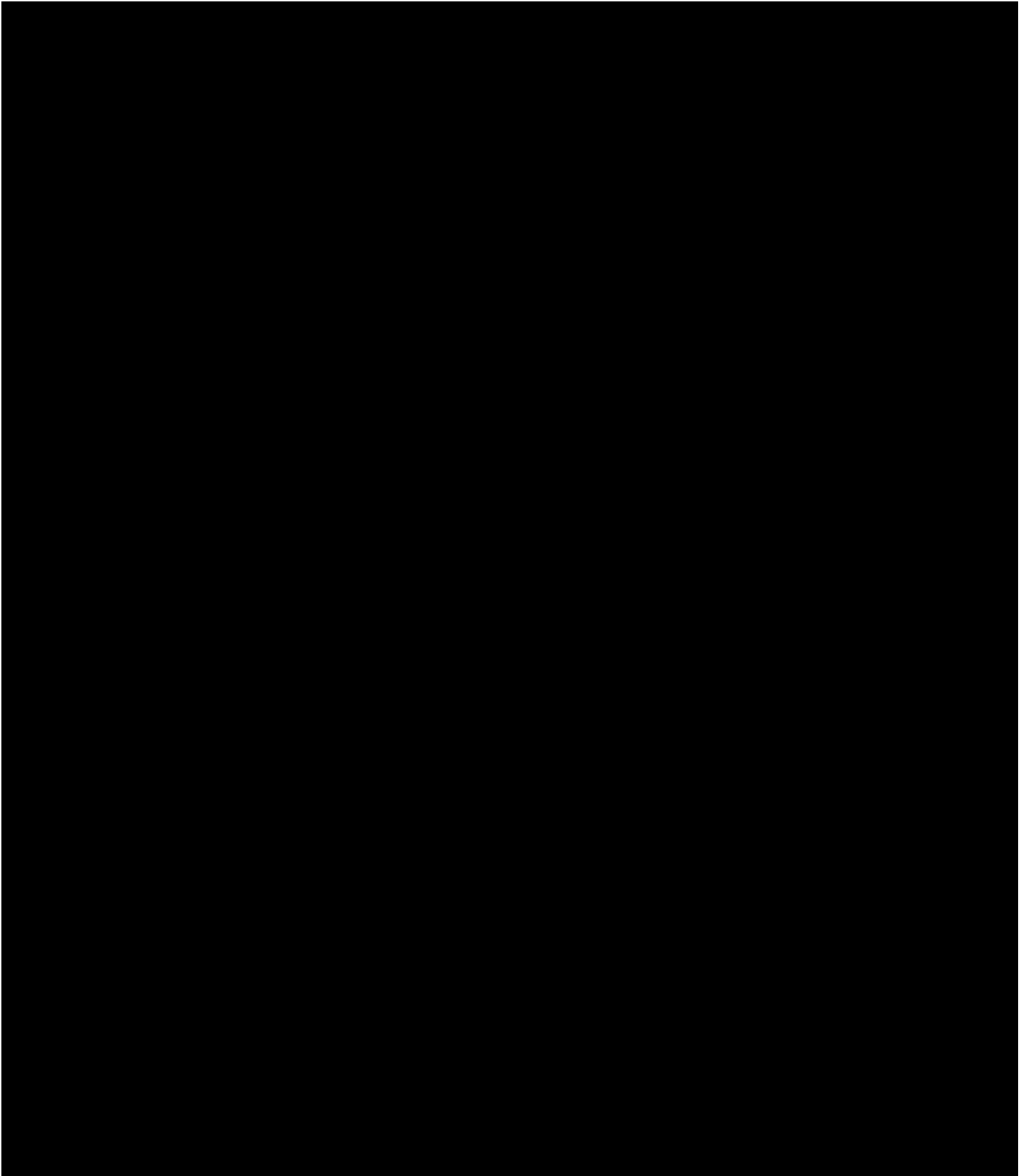


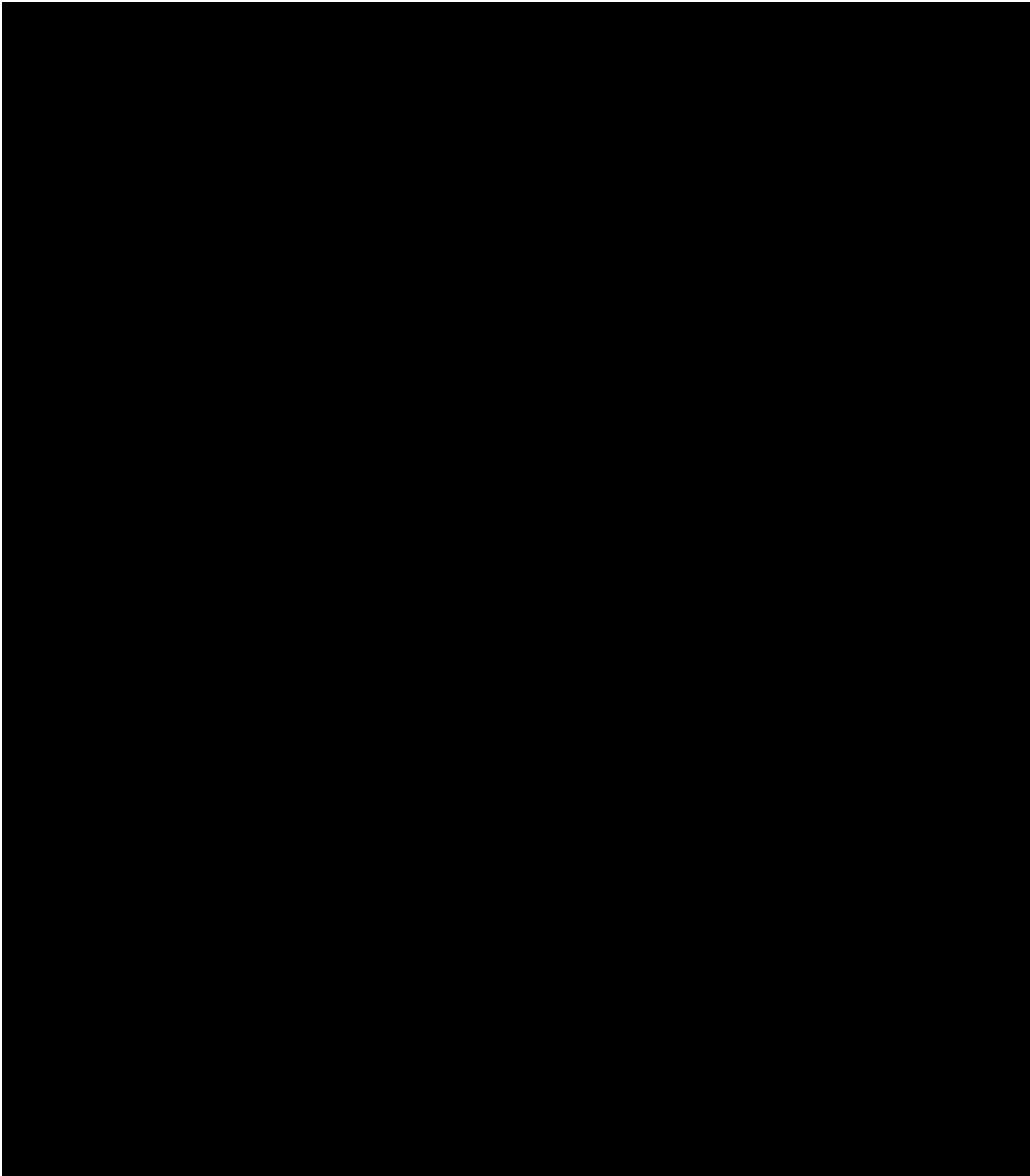




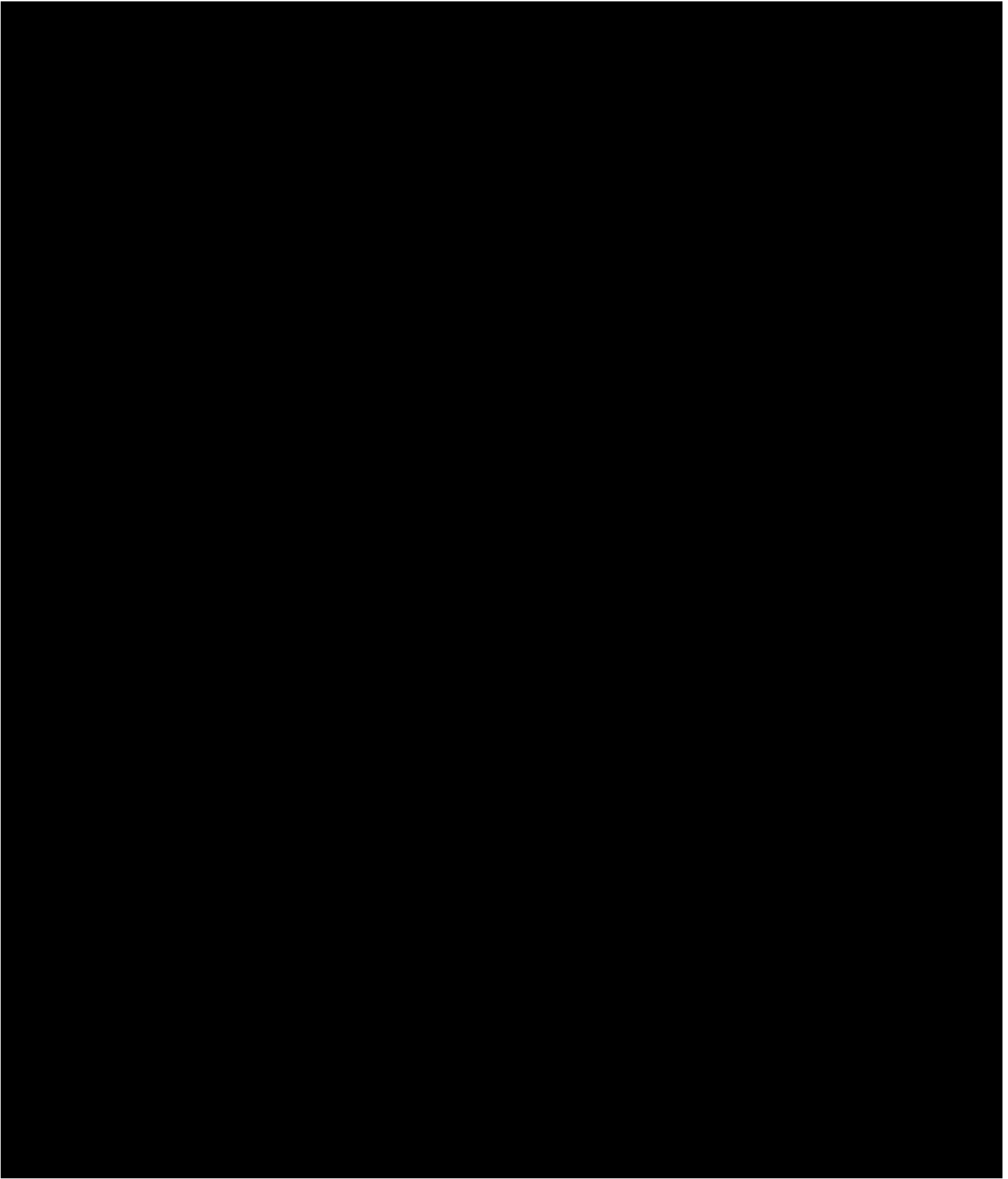


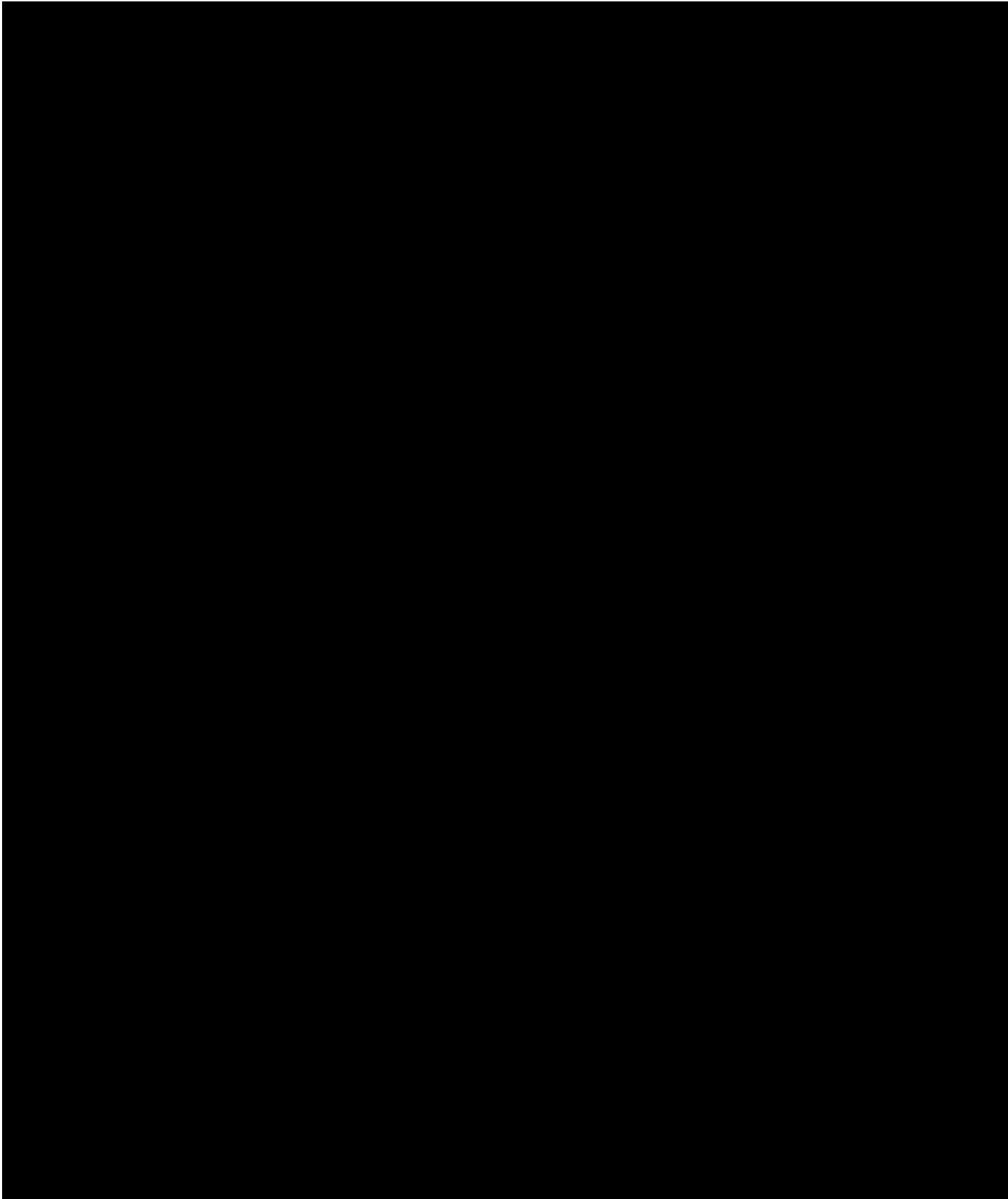


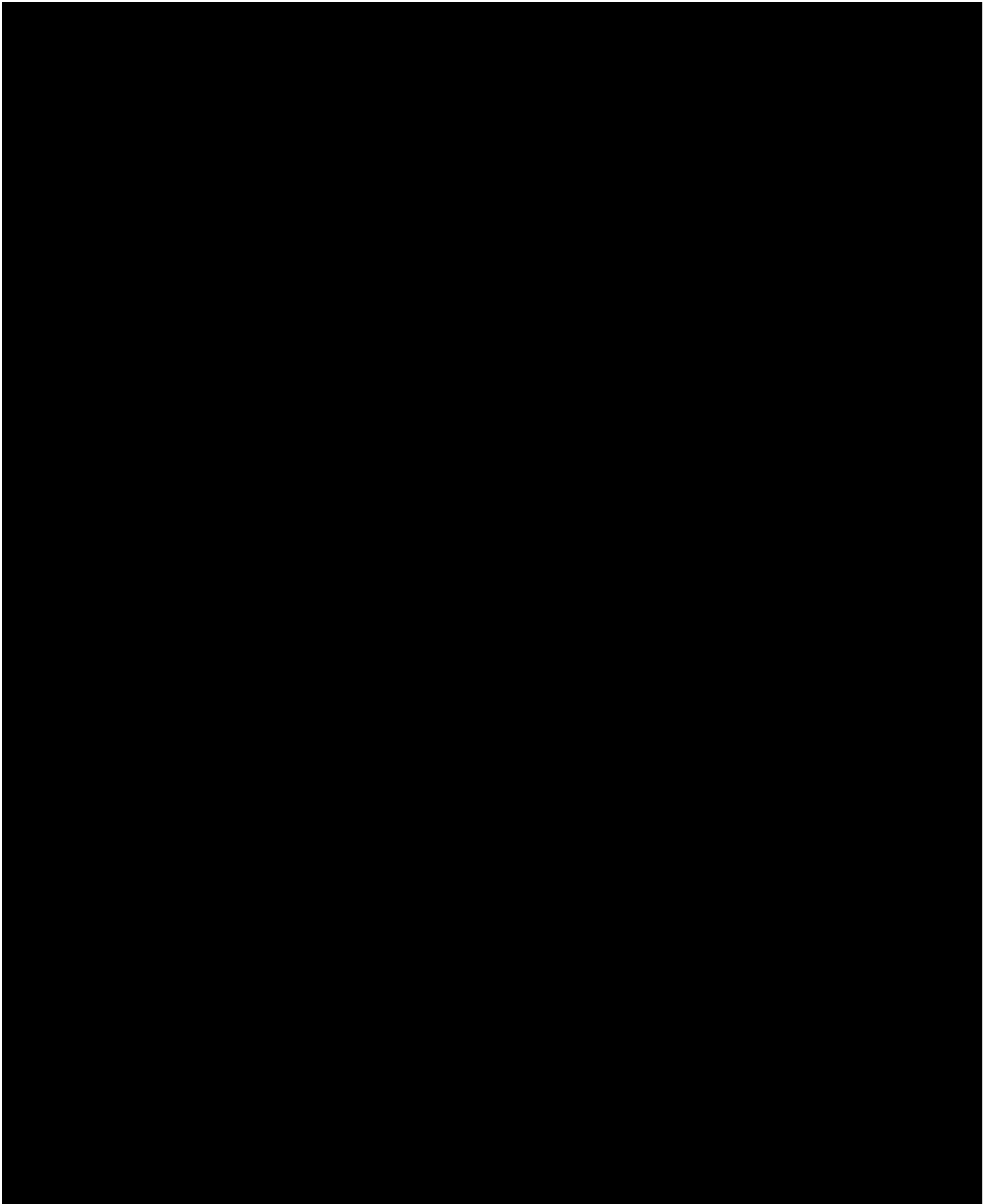




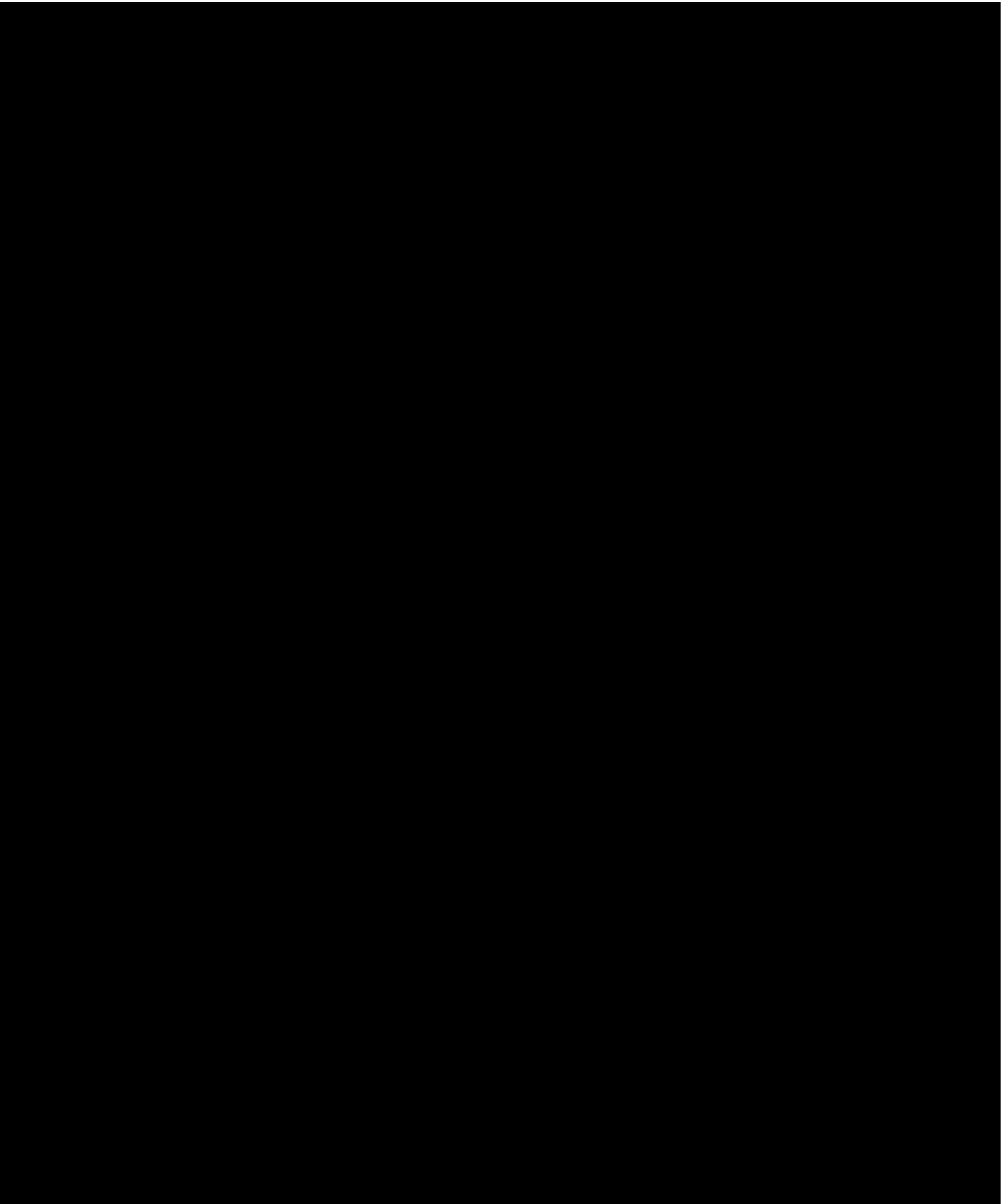


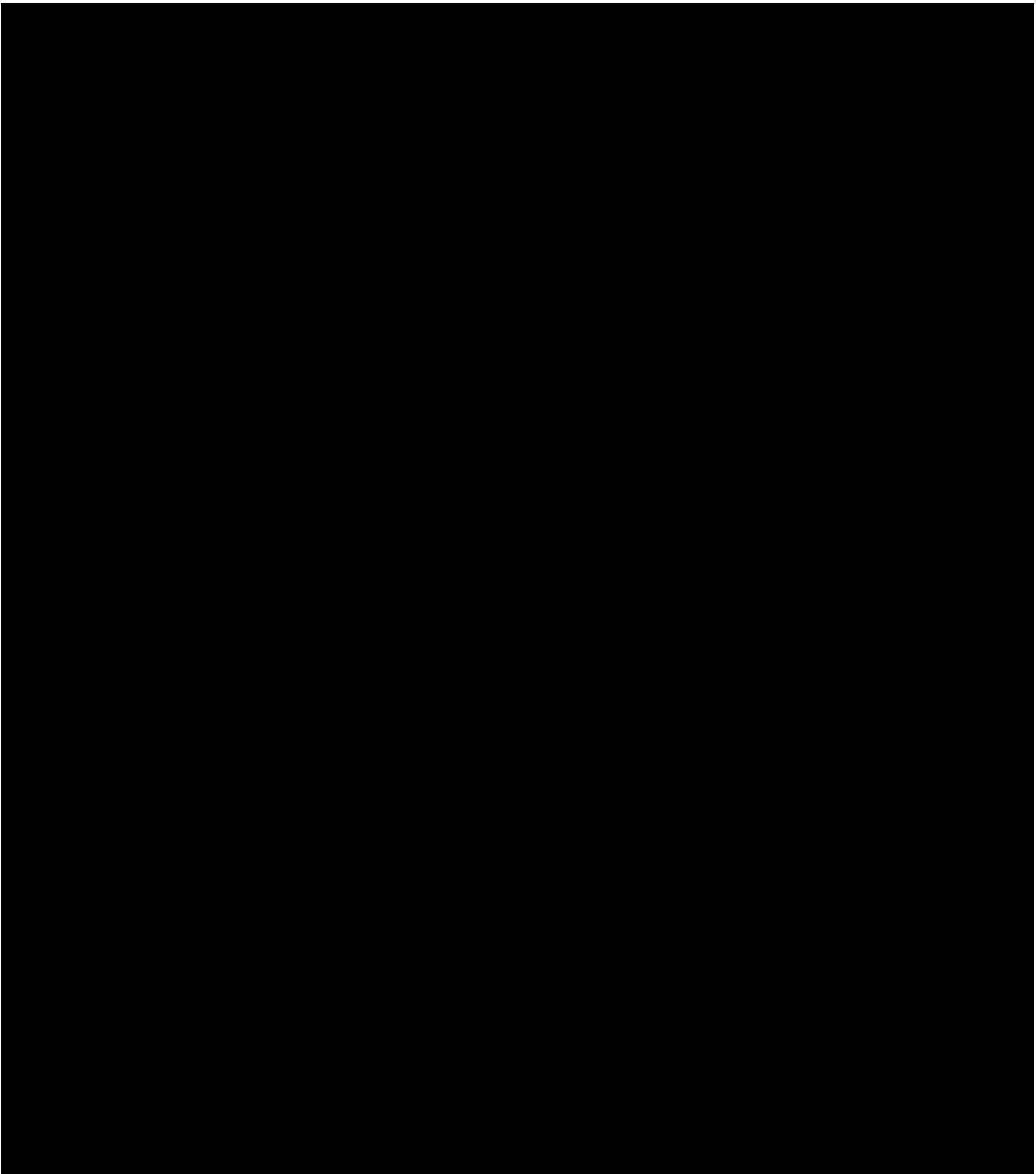


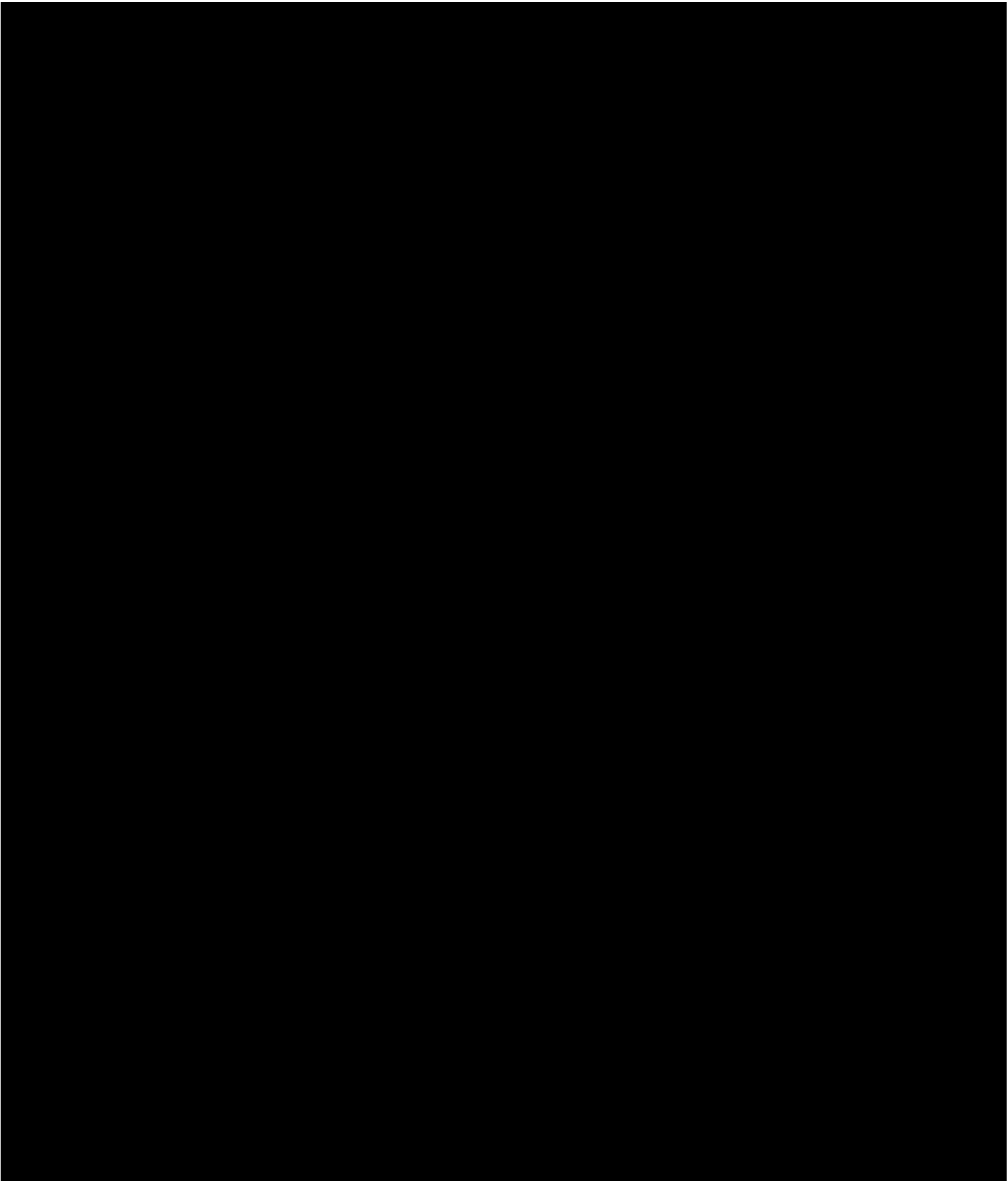


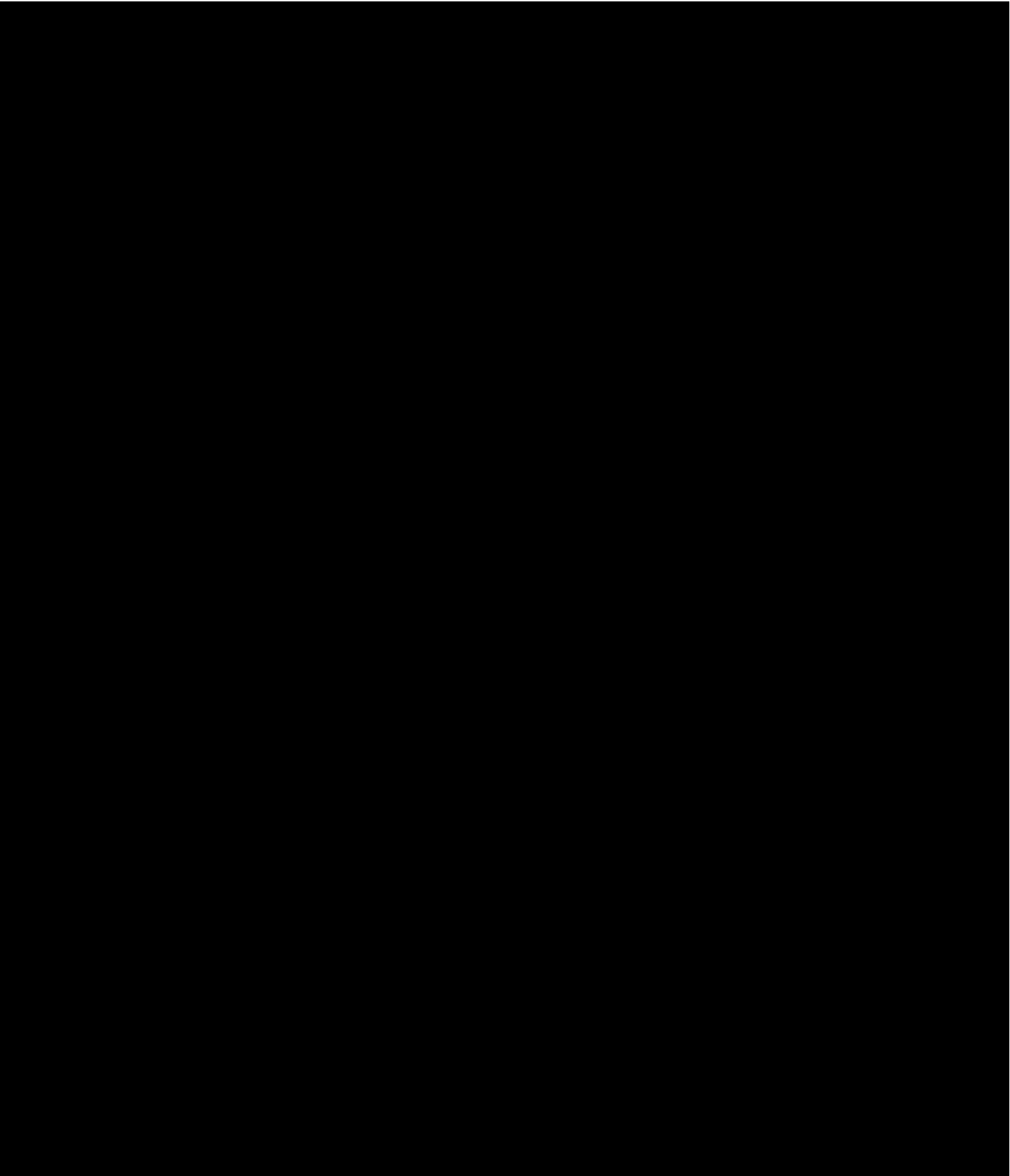




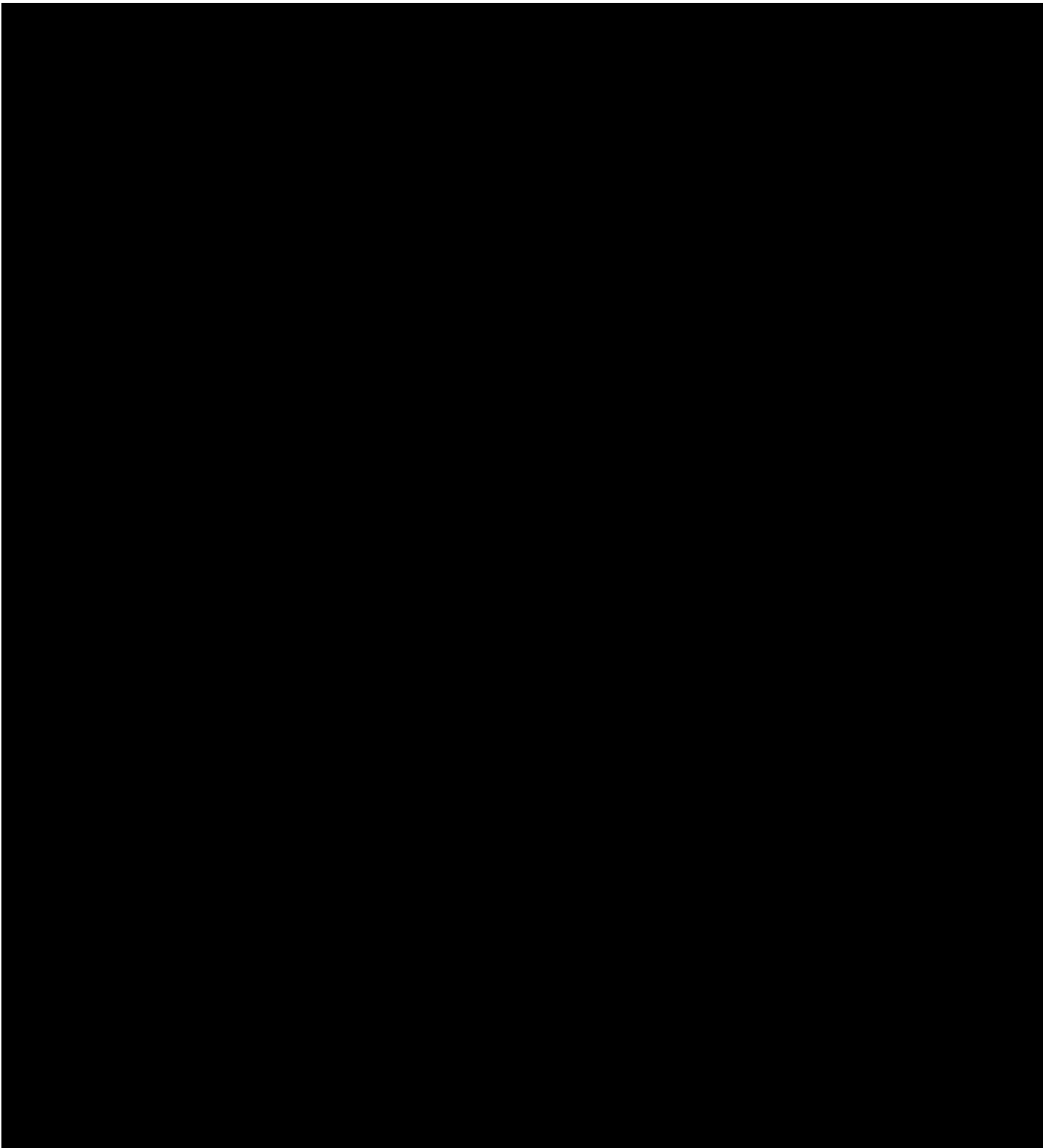


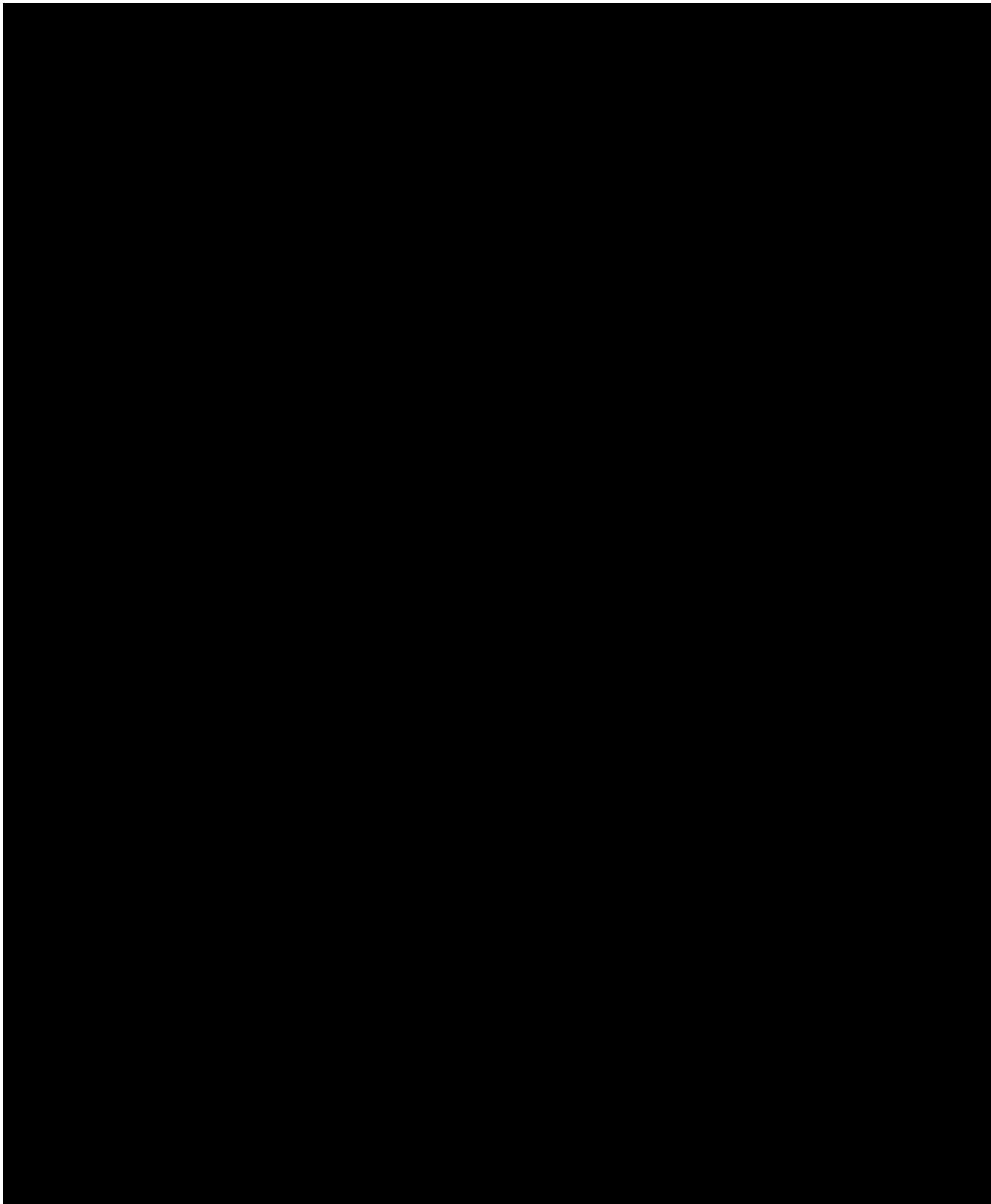


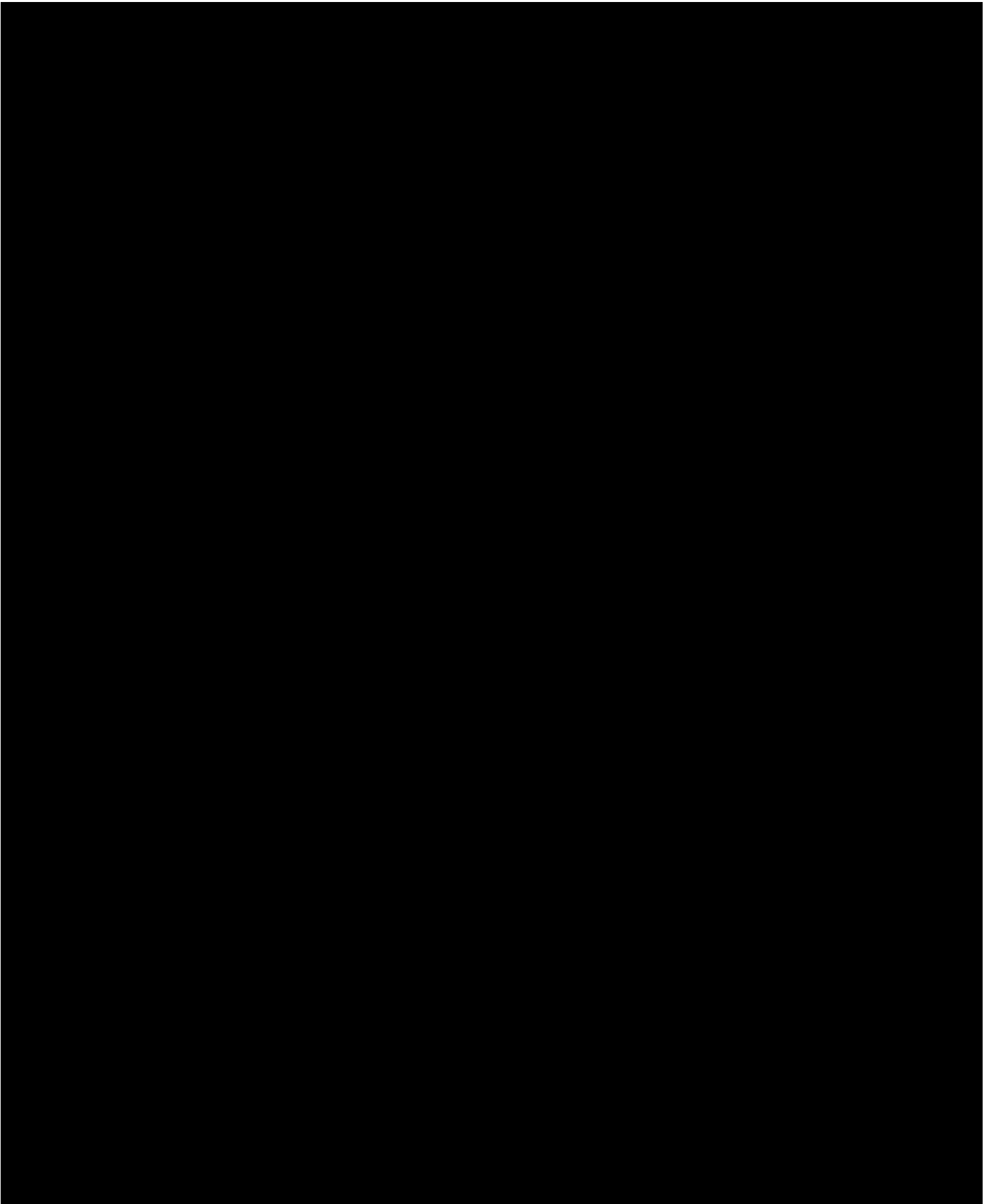


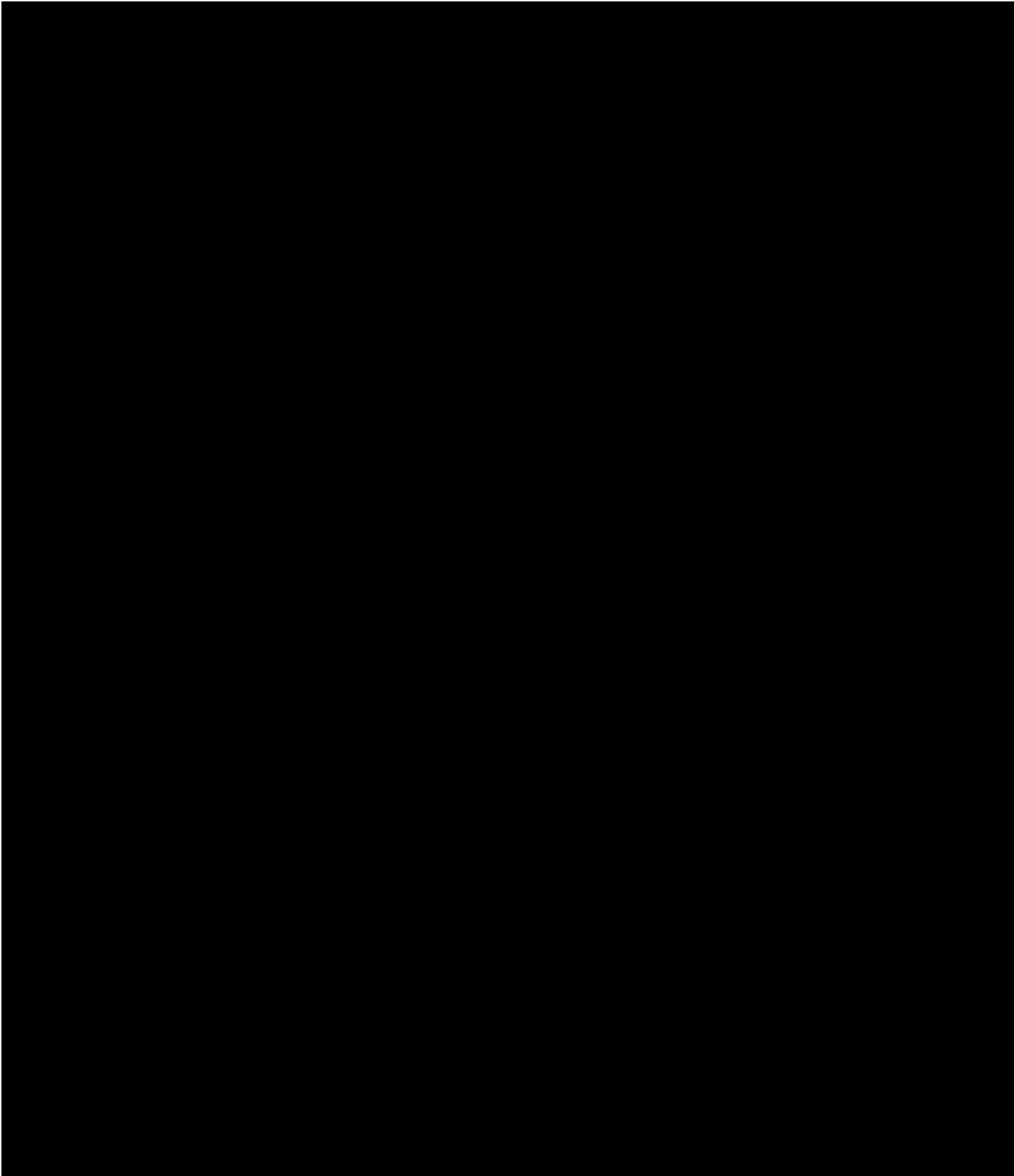




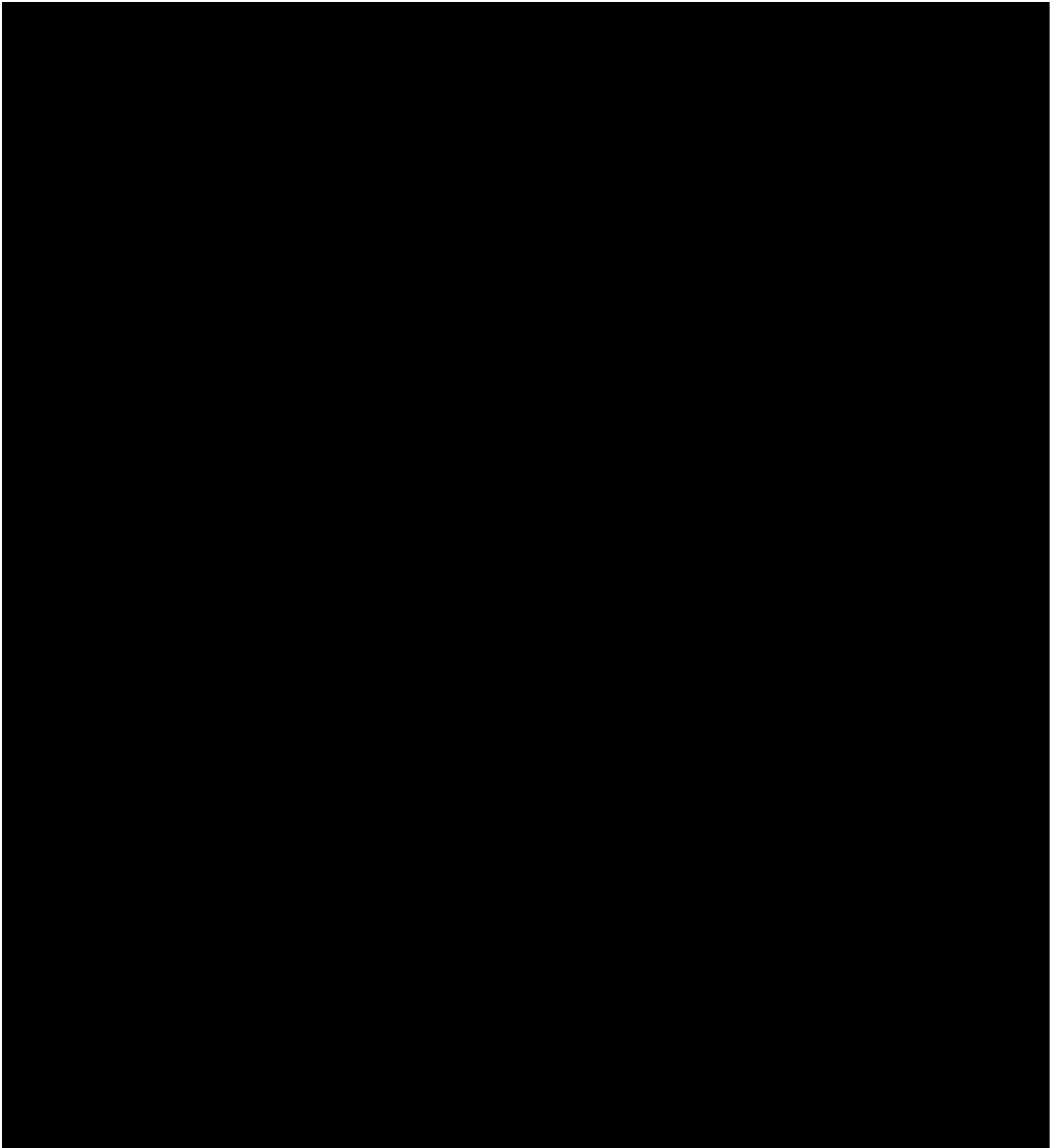


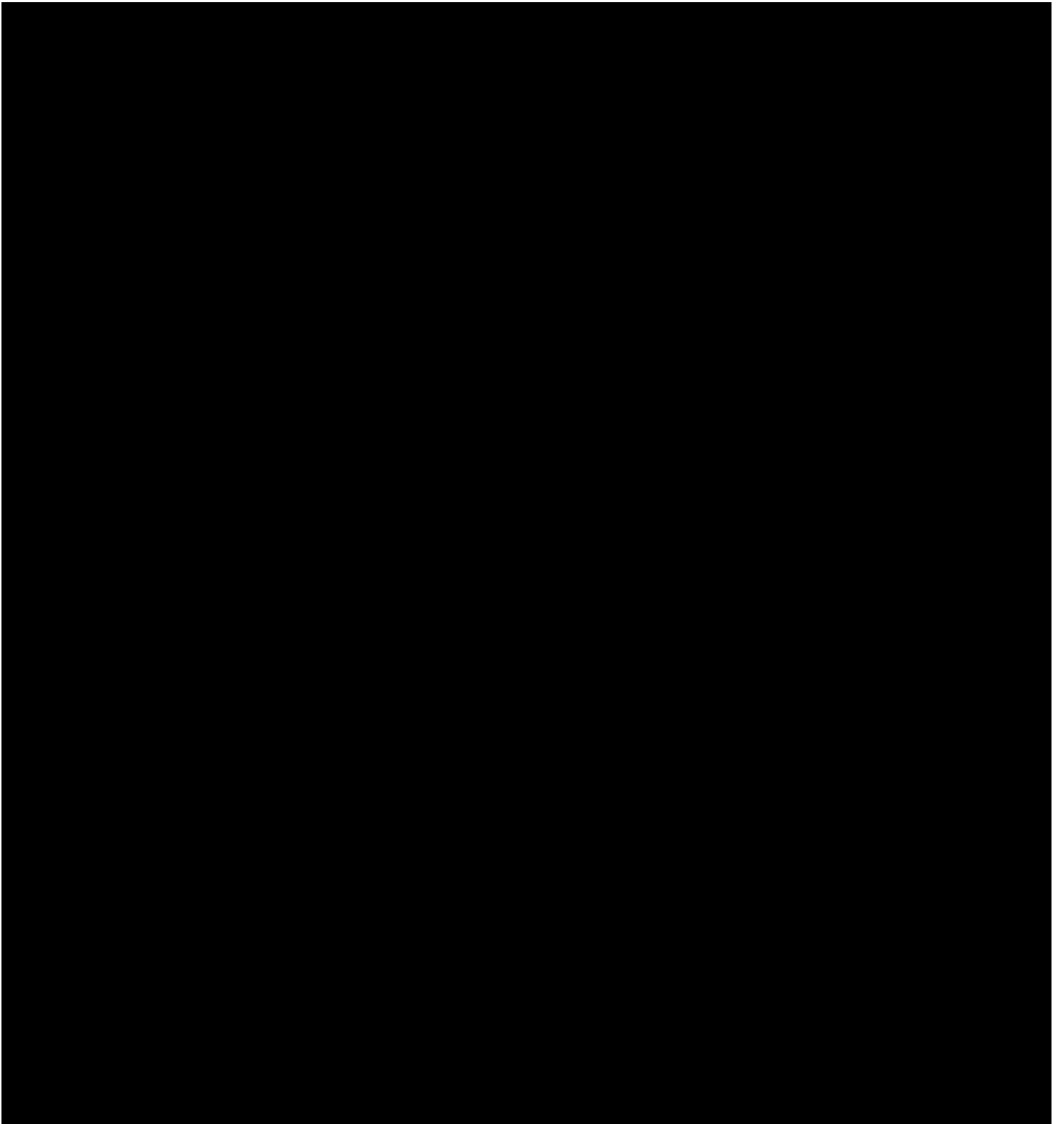


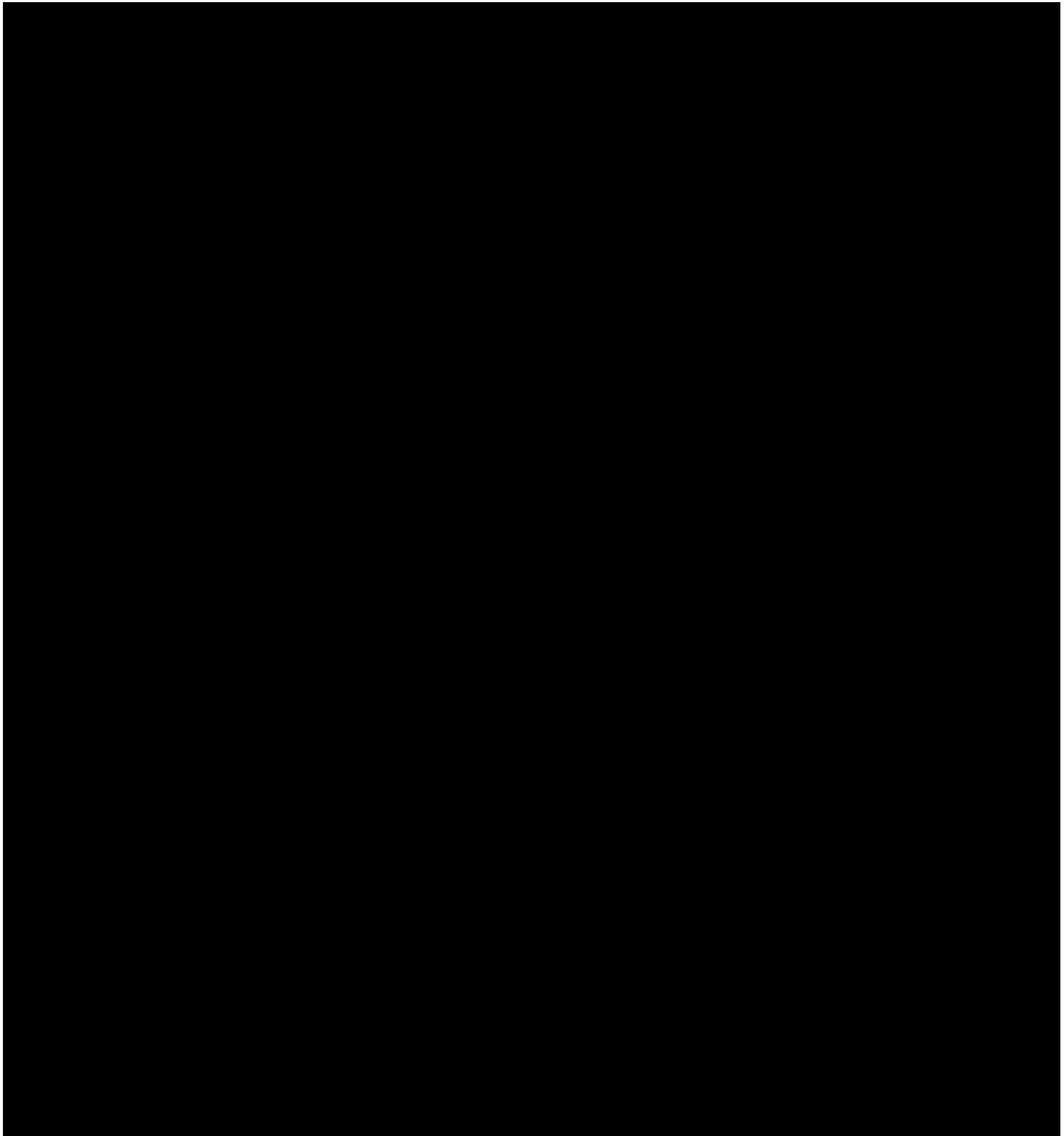


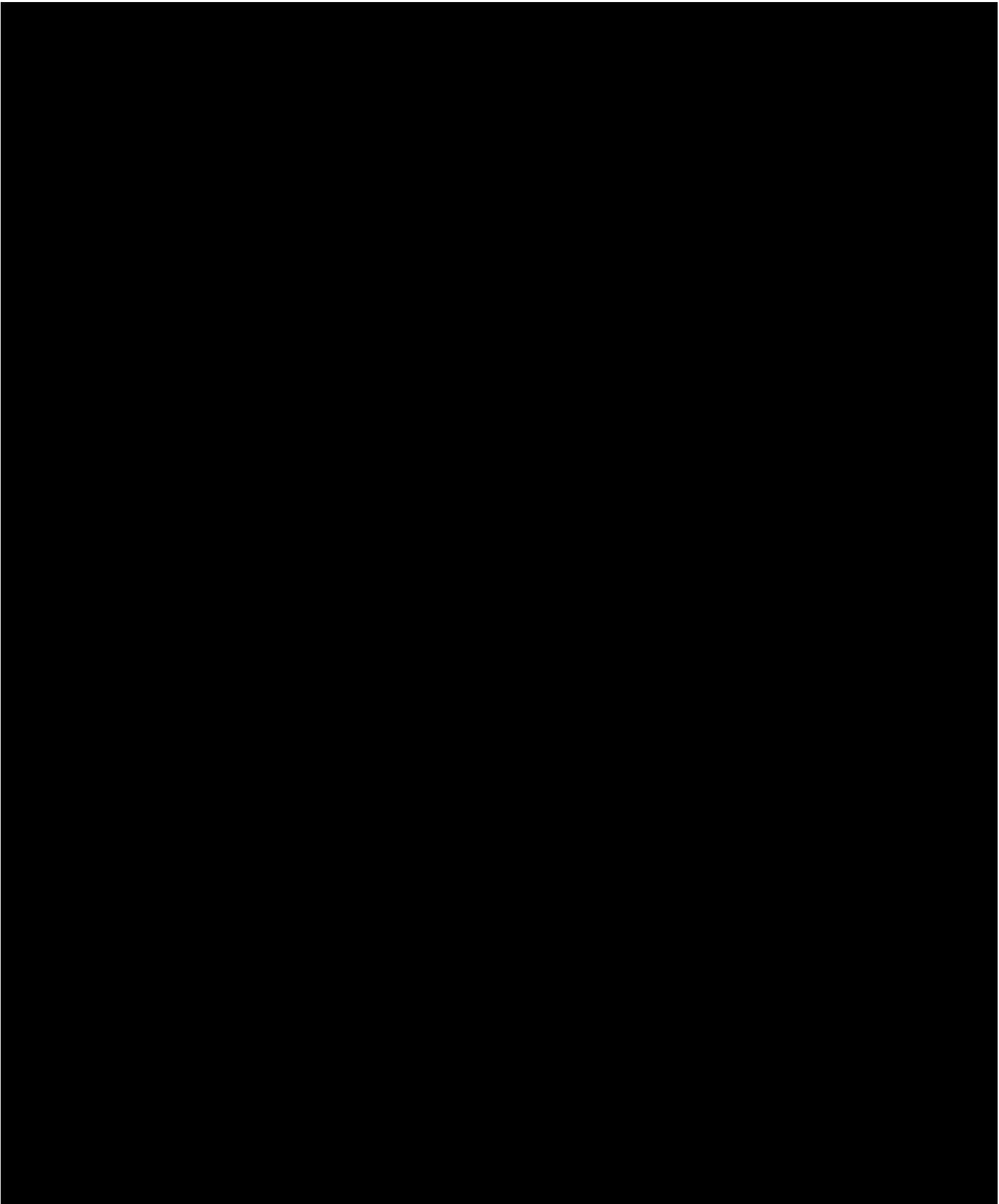


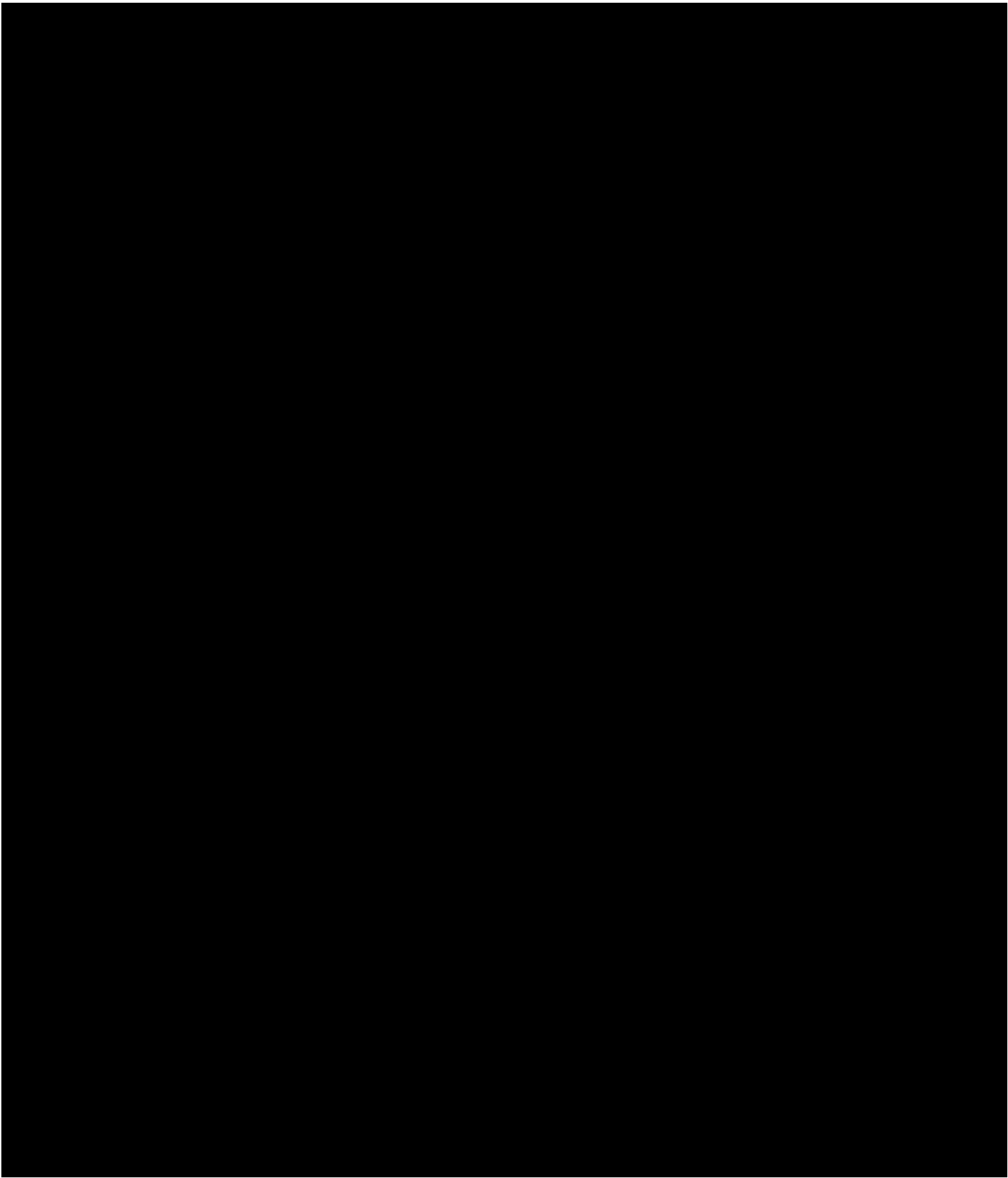




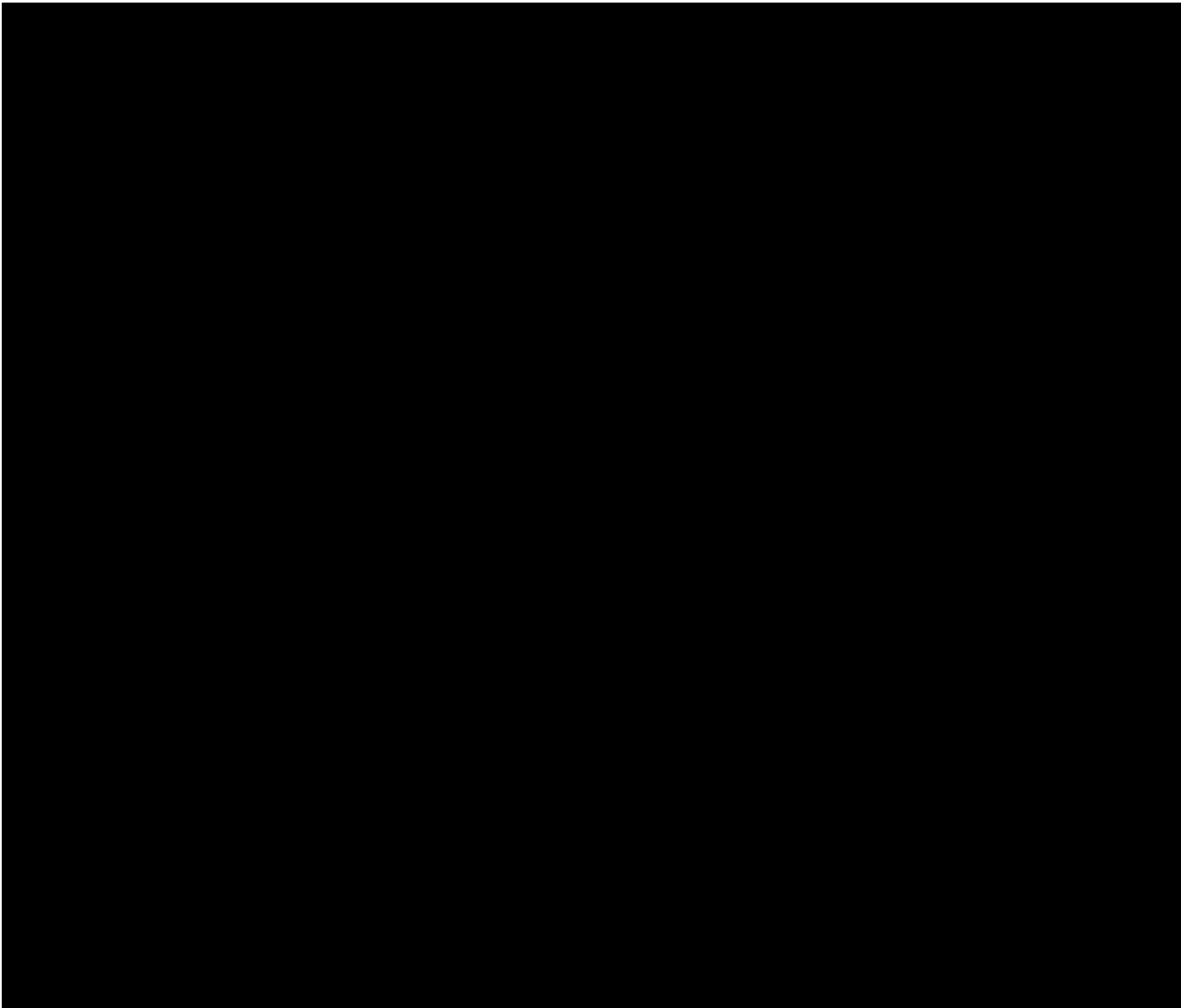














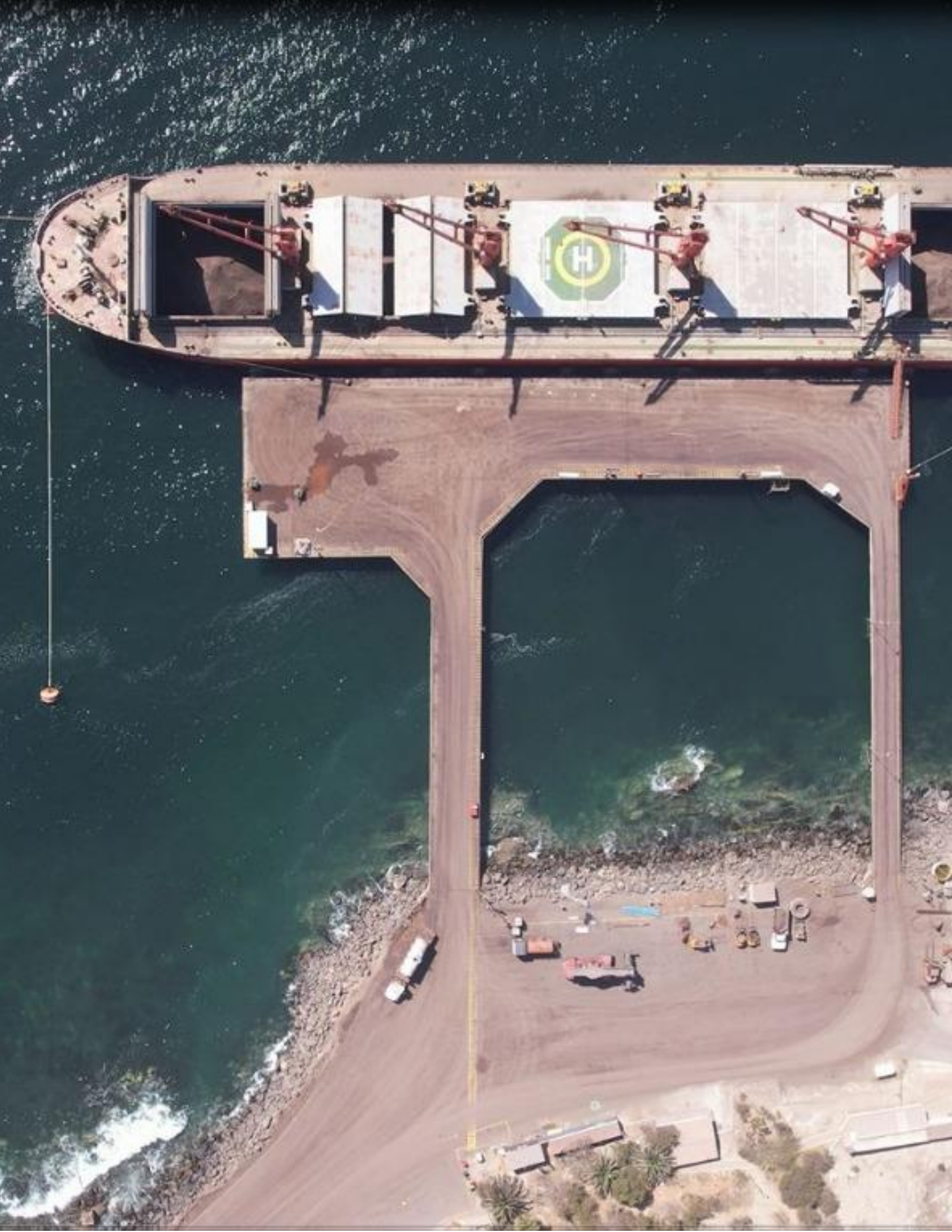
# **SERVICIOS PORTUARIOS DEL PACIFICO LTDA.**

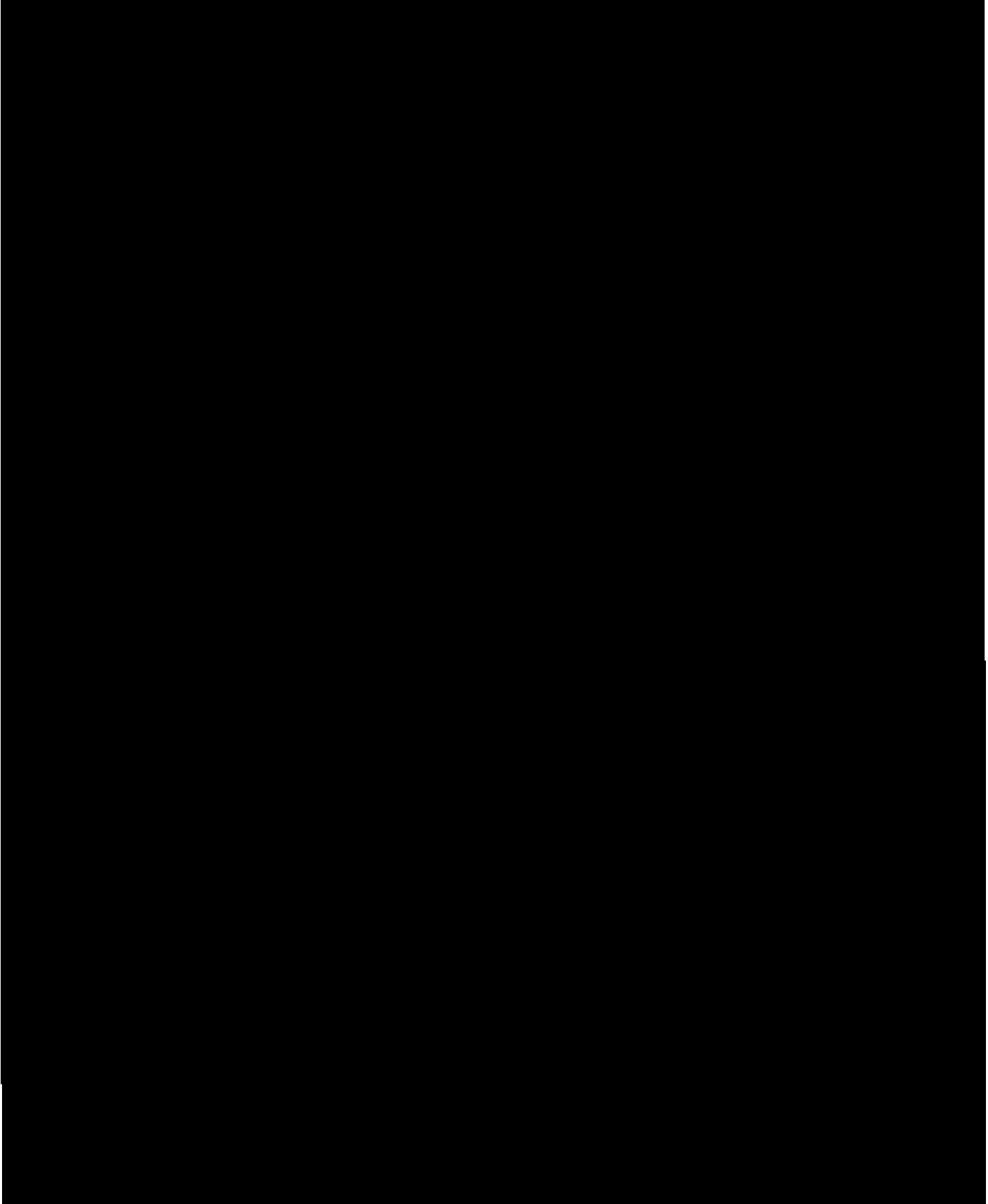
Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2024 y 2023

## **CONTENIDO**

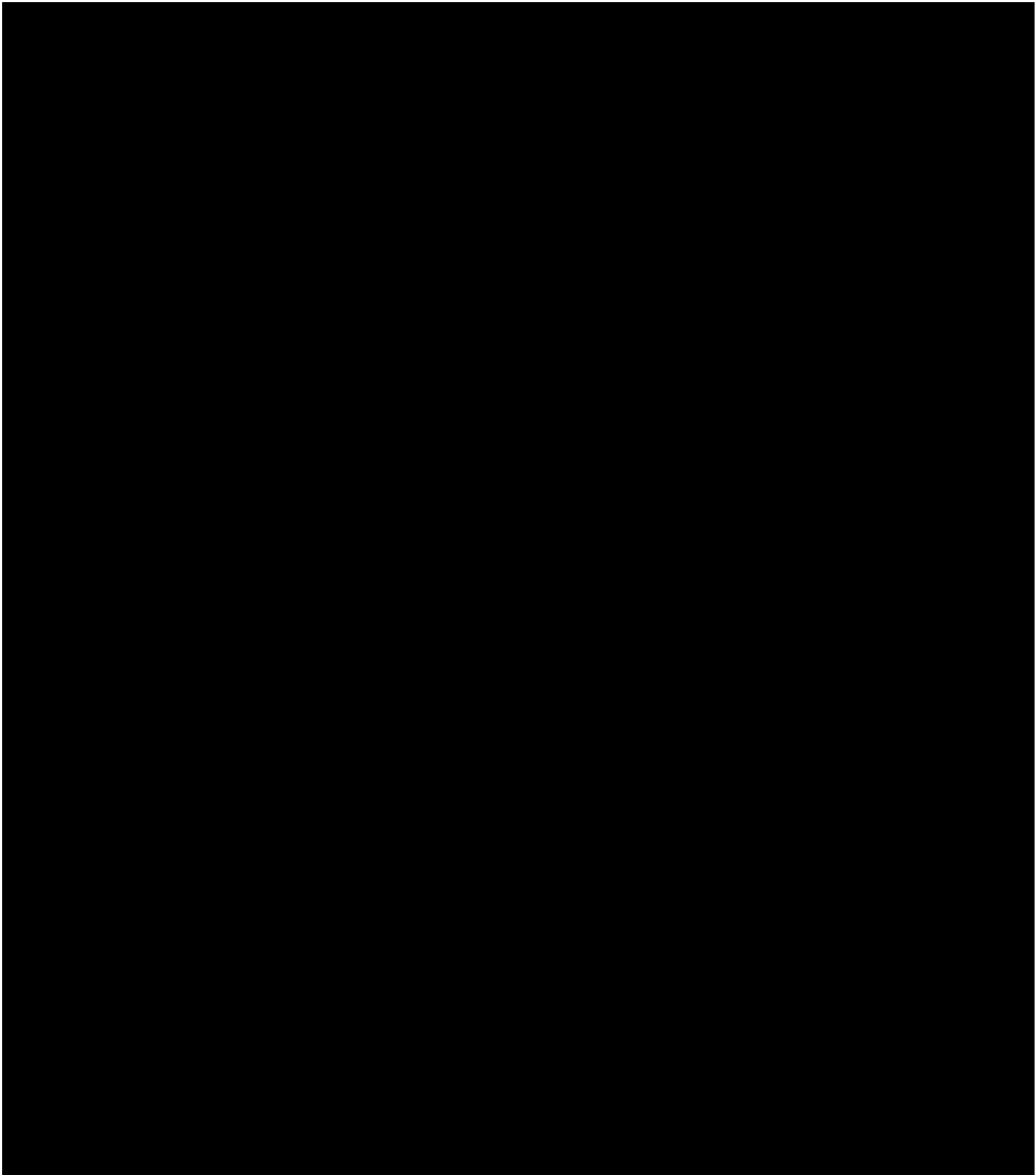
Informe del auditor independiente  
Estados de situación financiera  
Estados de resultados integrales  
Estados de cambios en el patrimonio neto  
Estados de flujos de efectivo directo  
Notas explicativas a los estados financieros

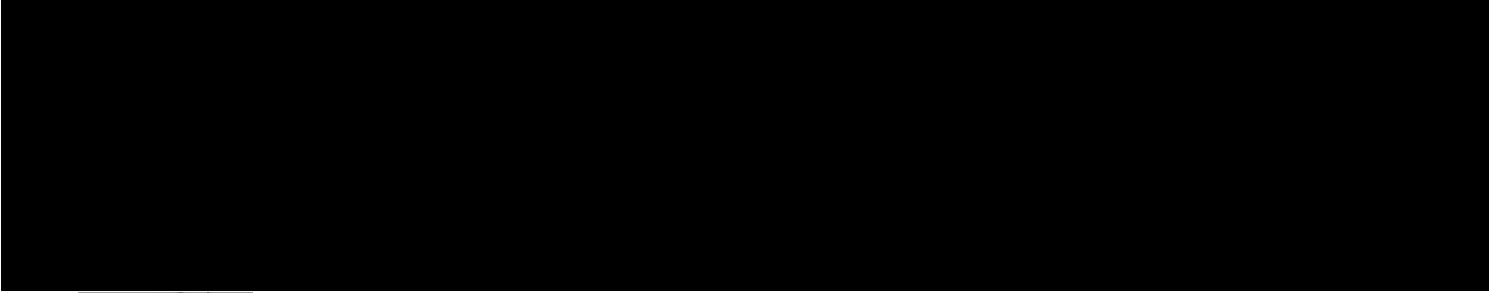

M\$ - Miles de pesos chilenos  
US\$ - Dólares estadounidenses  
UF - Unidad de fomento





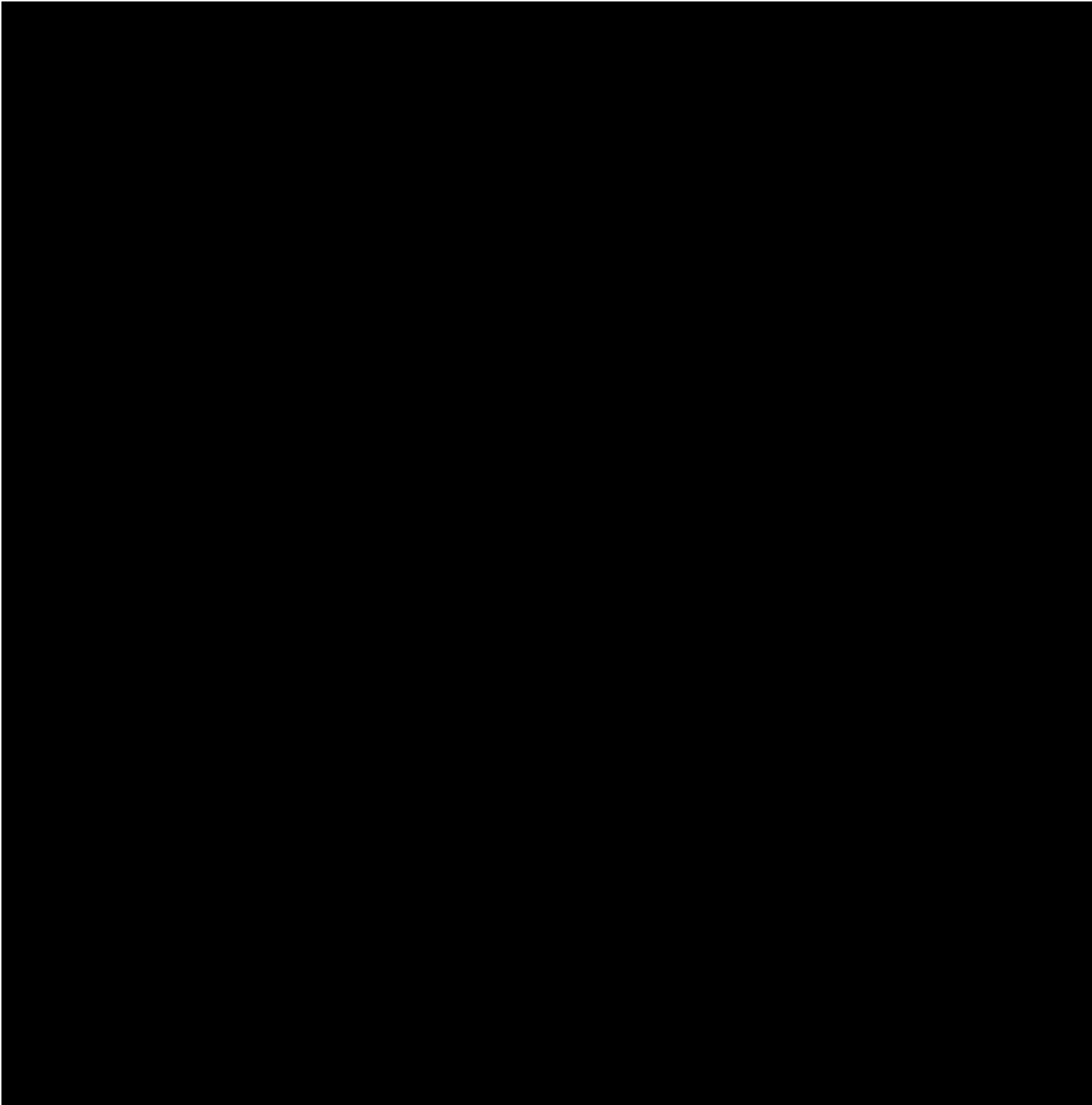




Gonzalo Muñoz Manríquez  
Director  
Santiago, 2 de mayo de 2025.

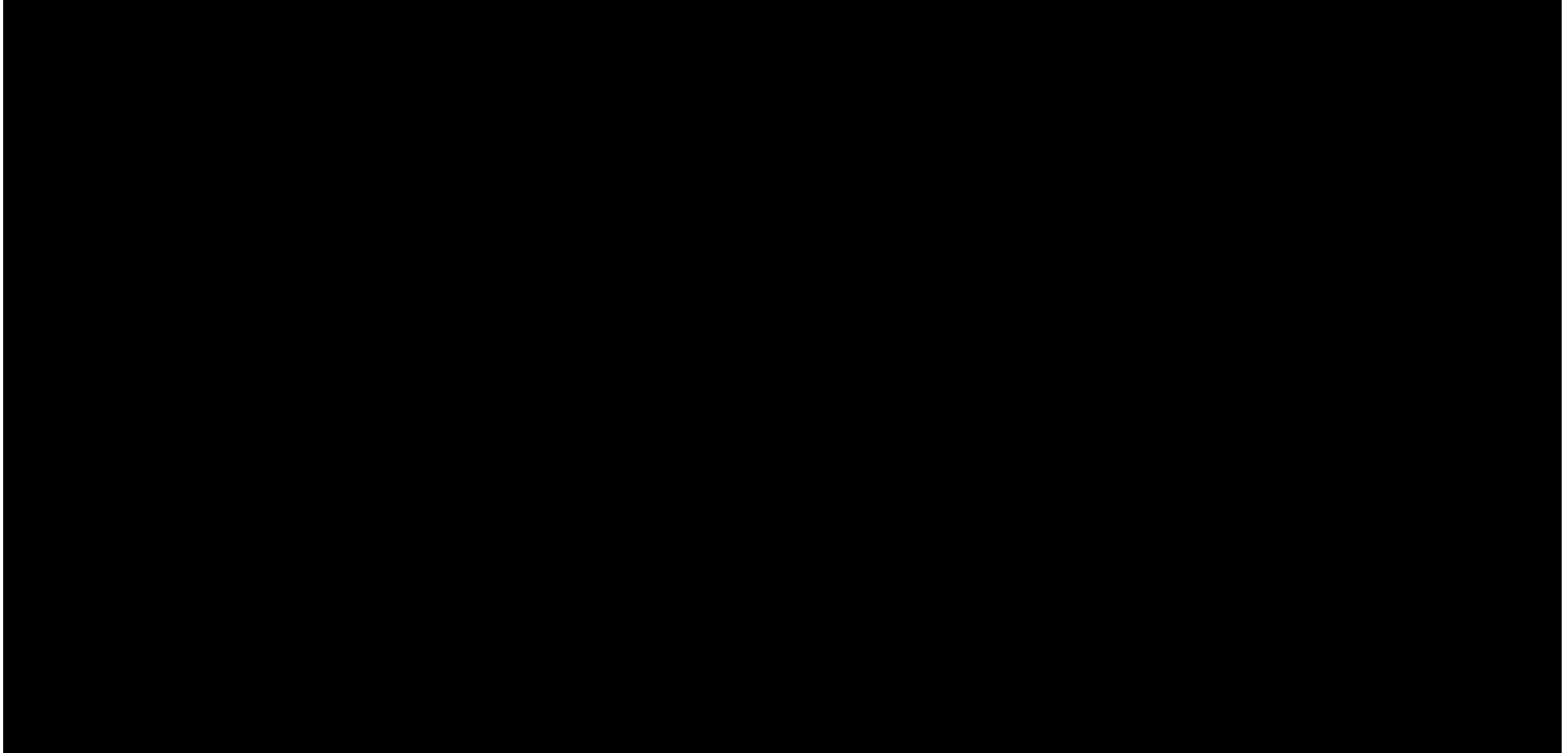
**SERVICIOS PORTUARIOS DEL PACÍFICO LTDA.**



**SERVICIOS PORTUARIOS DEL PACÍFICO LTDA.**

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**

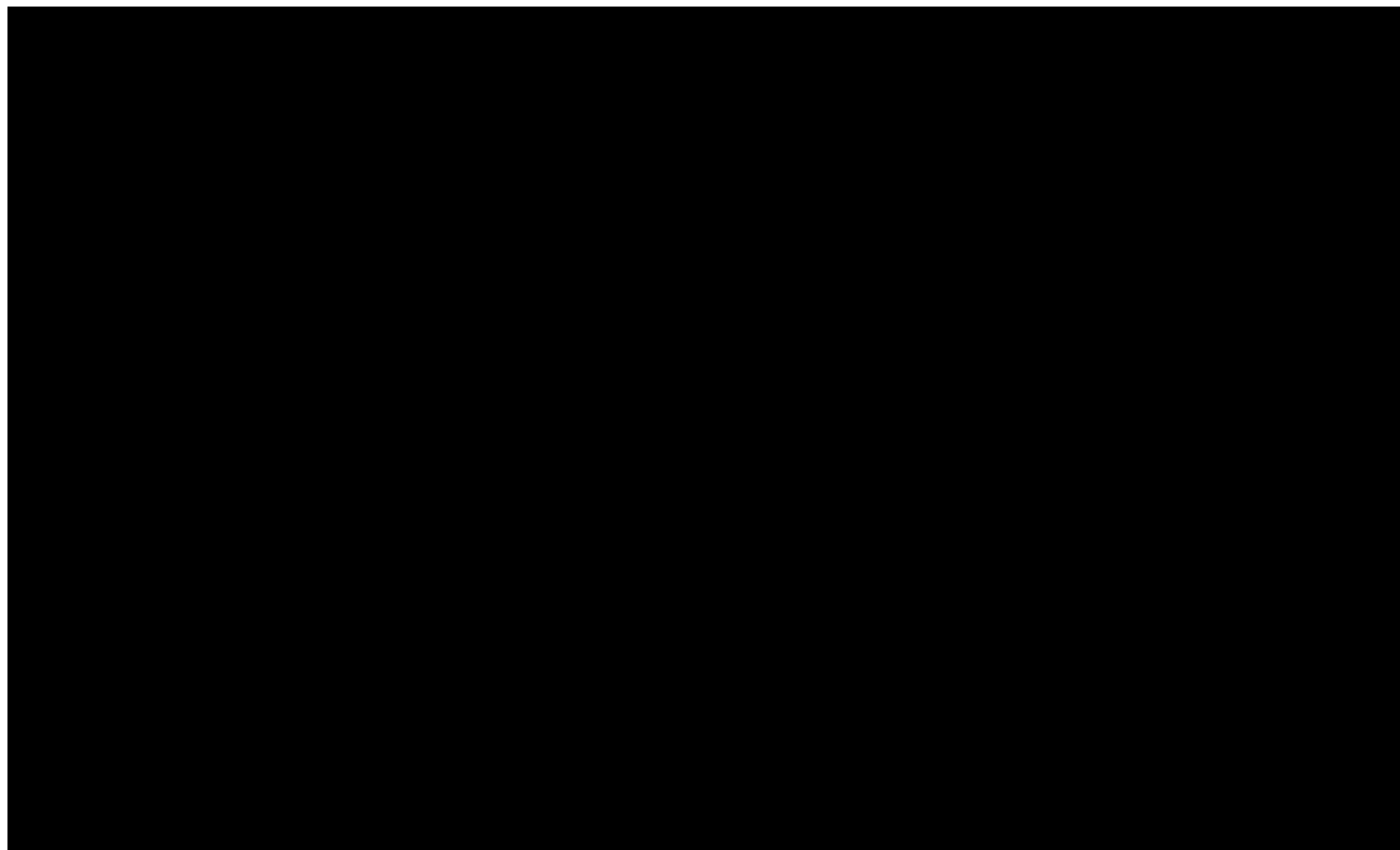
Al 31 de diciembre de 2024 y 2023



**SERVICIOS PORTUARIOS DEL PACÍFICO LTDA.**

**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES**

(POR FUNCIÓN)



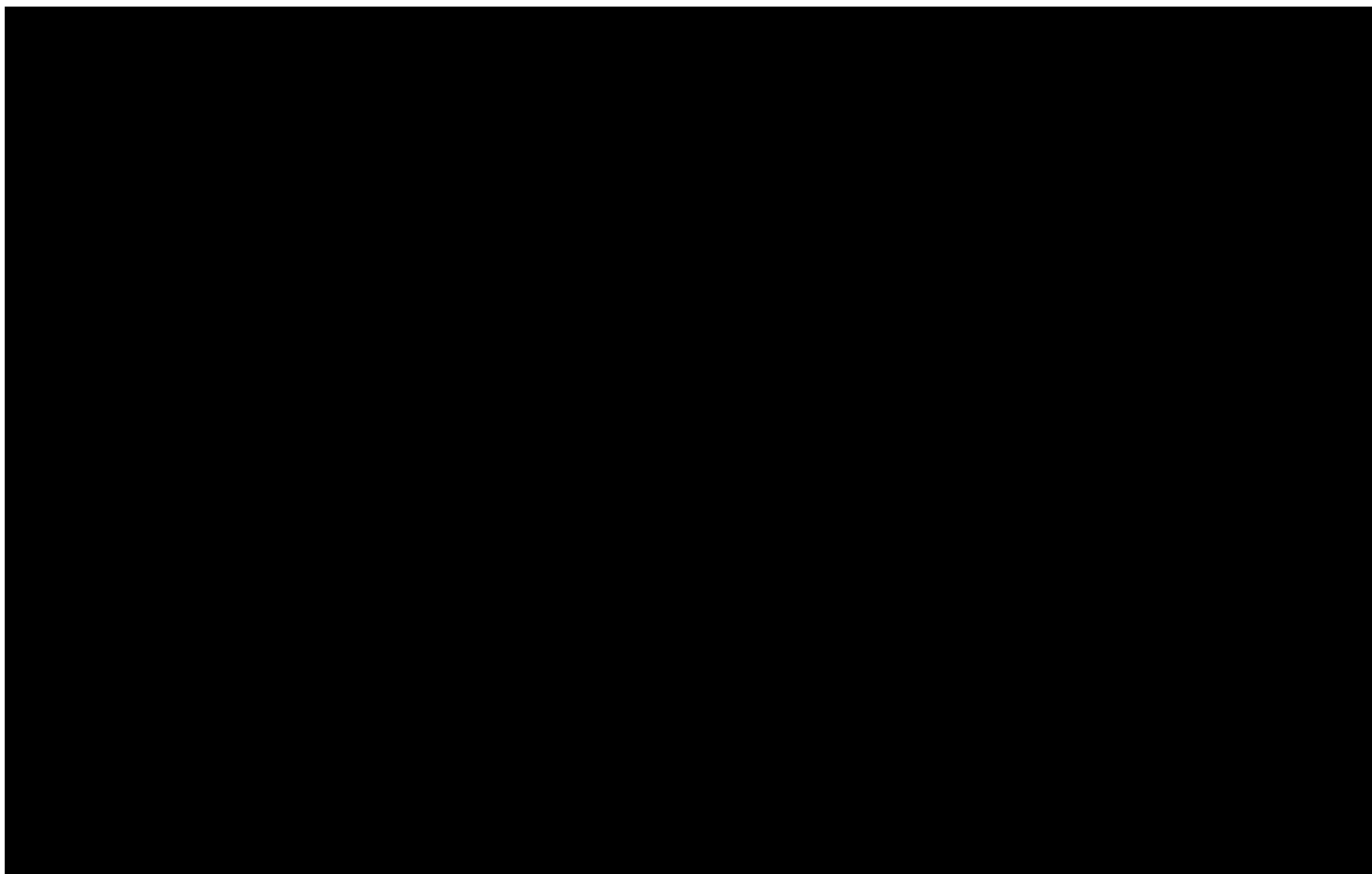
Las Notas adjuntas N° 1 al 15 forman parte integral de estos estados financieros.



**SERVICIOS PORTUARIOS DEL PACÍFICO LTDA.**

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

Por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 y 2023

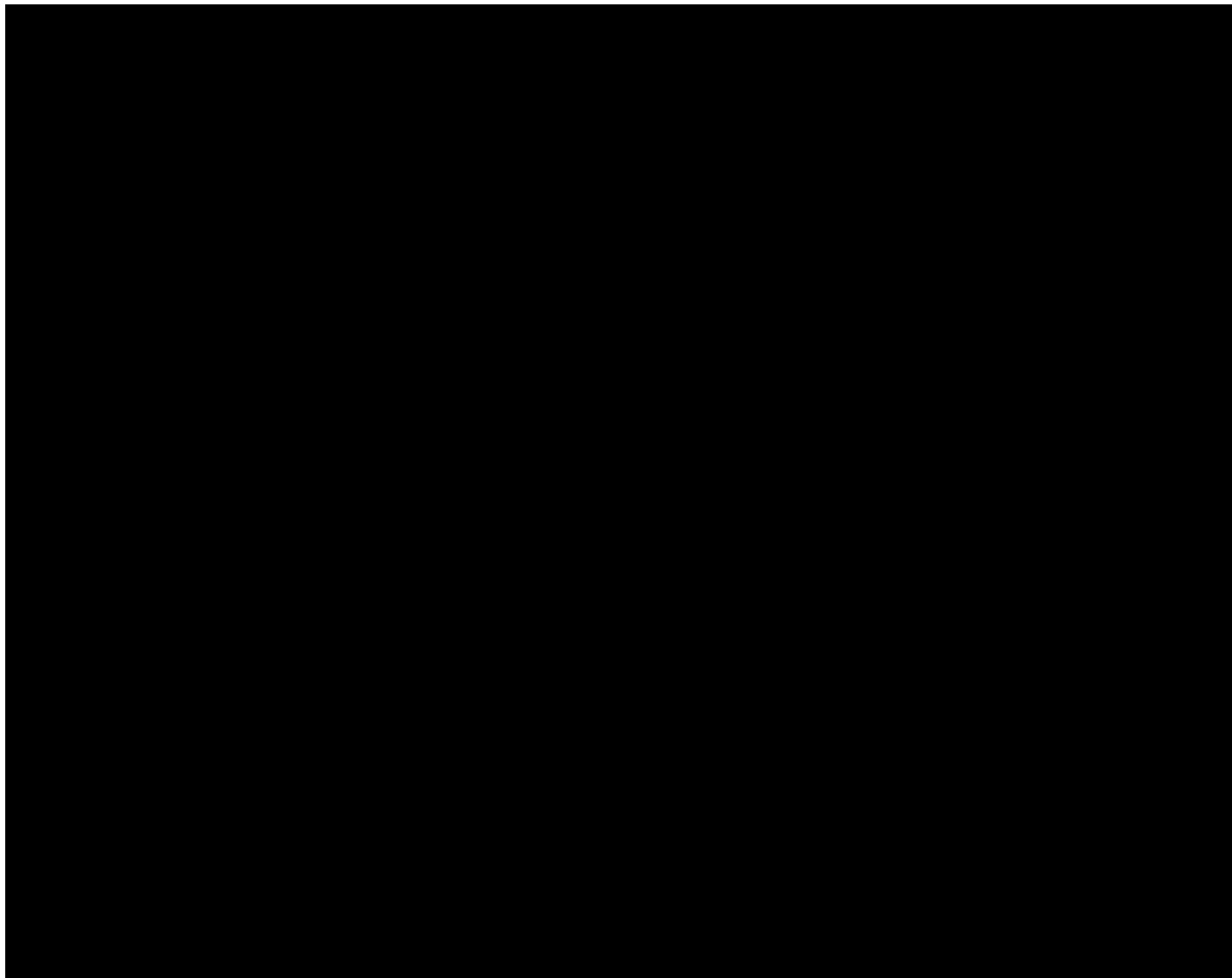


Las Notas adjuntas N° 1 al 15 forman parte integral de estos estados financieros.

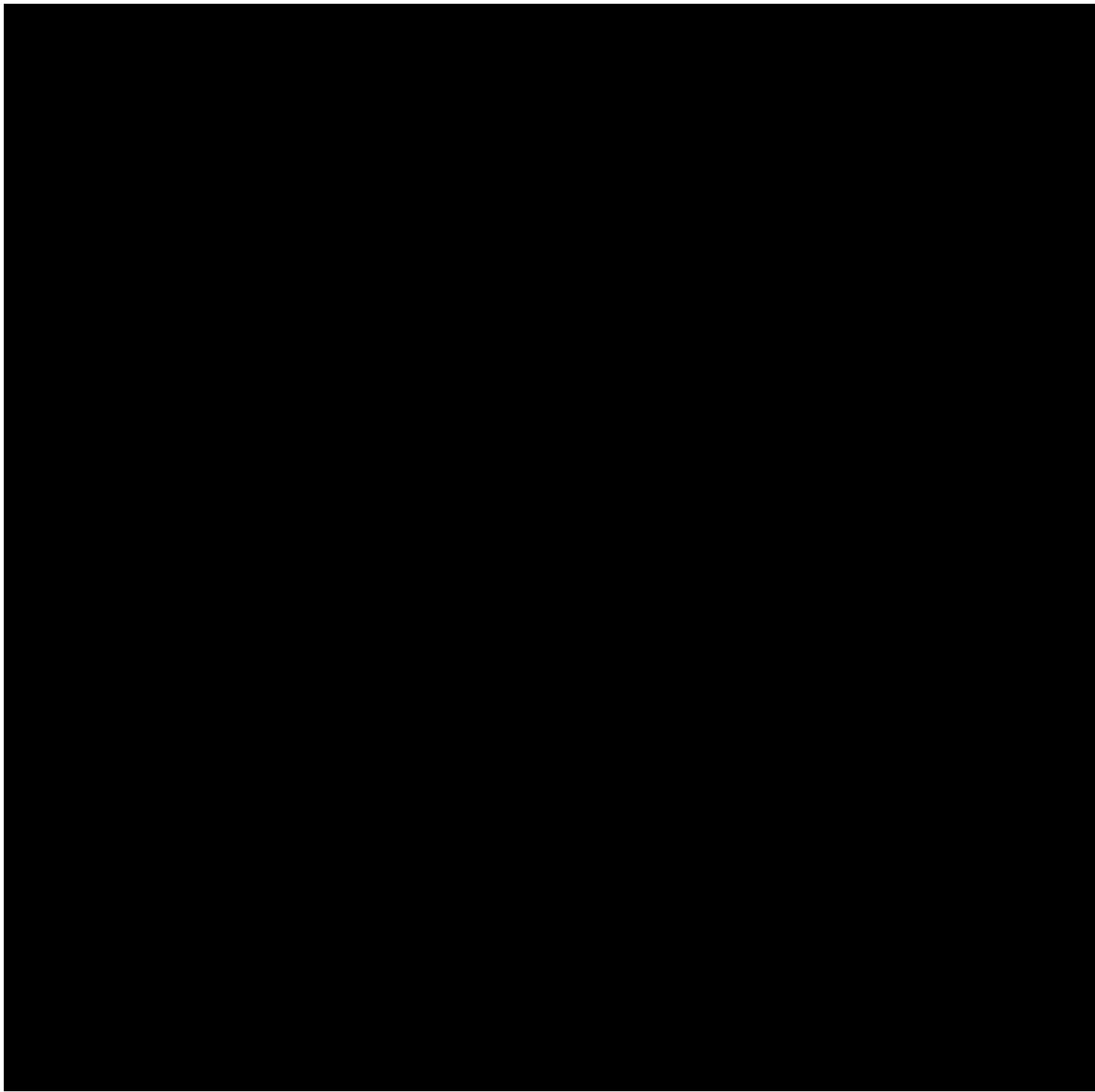
**SERVICIOS PORTUARIOS DEL PACÍFICO LTDA.**

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO**

(MÉTODO DIRECTO)



**SERVICIOS PORTUARIOS DEL PACÍFICO LTDA.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



**NOTA 2 – RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS Y BASES DE PRESENTACION**

